

Coyhaique, veintisiete de Septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol Corte 157-2022, RUC N° 2100368164-2, RIT N° O-23-2022, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, a la que se acumuló los Rol Corte 158, 159, 160, 161 y 162, todas del año 2022, comparece don Eduardo Salomón Lillo, abogado, Defensor Particular, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en la presente causa, en cuanto por ella, en lo recurrido, con fecha catorce de Julio de mil veintidós, se condenó a su representada Cristina Johana Carrasco Piffaut, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, el recurrente, como causal de nulidad, la contenida en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374, letra e), del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342, letra c), y 297, todos del mismo cuerpo legal citado, solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, que: *“se invalide el juicio oral y sentencia definitiva, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio conocido por el Tribunal no inhabilitado que corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal.”*.

Que, además, compareció el abogado Pablo Arias Andrade, Defensor Privado, deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia ya indicada, por medio de la cual y en lo recurrido, se



condenó a su representado Jorge Alberto Cáceres Vásquez, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, este recurrente, como causal de nulidad, la contenida en el motivo absoluto de nulidad del artículo 374, letra e), del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342, letra c), y 297, todos del mismo cuerpo legal citado, solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, que: *“1.- Que el tribunal Ad-quem acoja el presente recurso por la nulidad invocada. 2.- Que, conforme a lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, se anule totalmente el juicio y la sentencia, señalándose que el estado en el cual hubiere de quedar el procedimiento, y se ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.”*.

Que, también, compareció el abogado don Rafael Gallardo Durán, Defensor Privado, deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia ya señalada, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó a su representado Alexis Iván Barría Villegas, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley,



cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, este recurrente, como causal de nulidad, la contenida en el motivo absoluto de nulidad del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 11 N° 9 y 6 y 18, 57, 67, 68 y 69, del Código Penal, y artículo 19, letra a) de la Ley N° 20.000, solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, que: *“el tribunal ad-quem invalide la sentencia, y dicte separadamente una sentencia de reemplazo en que se condene a su representado a la pena que en derecho corresponde, esto es la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo o en subsidio y en el peor de los casos a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo.”*.

Que, del mismo modo, compareció don Rodrigo Rehbein Paredes, Defensor Particular, deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia citada, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó a su representado Rodrigo Andrés Salazar Vargas, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, este recurrente, como causal de nulidad, la contenida en el motivo absoluto de nulidad del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 63 del Código Penal,



solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, que: *“se declare que se acoge la causal interpuesta por este recurrente para el presente recurso de nulidad, esto es, la establecida en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Dictándose sentencia definitiva de reemplazo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del CPP, que declare que se vulneró lo prescrito en el artículo 63 inciso 2° del Código Penal, por lo que sería improcedente la aplicación de la agravante especial del artículo 19 letra a) de la ley 20.000 y, en definitiva se aplique a mi representado una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por no existir agravantes en su contra, y considerándose que la mayor o menor extensión del mal causado de acuerdo al artículo 69 del Código Penal se encuentra en su rango mínimo, toda vez que las especies nunca llegaron a comercializarse.”.*

Que, por otro lado, compareció el abogado don Rogelio Andrés Piñeiro Santis, Defensor Penal Público, deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia indicada, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó a su representado Diego Javier Araneda Guenel, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, este recurrente, como causales de nulidad, la contenida en el motivo absoluto del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 19, letra a), de la Ley 20.000, como



principal y, en subsidio, la misma causal, en relación con los artículos 68 y 11 N° 6 del Código Penal y artículos 1, 3, 19 letra a) y 22 de la Ley 20.000, solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, para la principal: “1. Que el Tribunal Ad-Quem acoja el presente recurso por la causal invocada. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, proceda el Tribunal de alzada a anular sólo la sentencia; y dicte, sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo en la cual se disponga: a) Que no se imponga a mi representado **DIEGO JAVIER ARANEDA GUENEL**, la agravante de responsabilidad penal del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000; b) Que beneficien a mi representado las atenuantes de los artículos 11 número 6 del Código Penal y 22 de la Ley 20.000; c) Que se condene a mi representado **DIEGO JAVIER ARANEDA GUENEL**, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, o al quantum de pena que V.S. ILTLMA. Determine conforme a Derecho, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, al pago de una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales y, a las accesorias legales que correspondan; o a la sanción que V.S. ILTMA determine conforme a derecho; como autor, de un delito de Tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000.”; y para la subsidiaria: “1. Que el Tribunal Ad-Quem acoja el presente recurso por la causal invocada. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, proceda el Tribunal de alzada a anular sólo la sentencia; y dicte, sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo en la cual se disponga: a) Que afecta a mi representado **DIEGO JAVIER ARANEDA GUENEL**, la agravante de responsabilidad penal del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000. b) Que beneficien a mi representado las atenuantes de los artículos 11 número 6 del Código Penal y 22 de la Ley 20.000. c) Que se condene a mi representado **DIEGO JAVIER ARANEDA GUENEL**, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, o



al quantum de pena que V.S. ILTLMA. Determine conforme a Derecho, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, al pago de una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales y, a las accesorias legales que correspondan; o a la sanción que V.S. ILTMA determine conforme a derecho; como autor, de un delito de Tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000.”.

Que, por último, compareció don Ricardo Flores Tapia, abogado, Defensor Penal Público, quien dedujo recurso de nulidad en contra de la referida sentencia, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó a su representada Sonia Francisca Barraza Pacheco, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas.

Invocó, este recurrente, como causales de nulidad, la contenida en el motivo absoluto del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 19, letra a), de la Ley 20.000, como principal y, en subsidio, la misma causal, en relación con el artículo 15 N° 1 del Código Penal, solicitando, como peticiones concretas, respecto de su recurso, para la principal: “**1. Solicito a V.S. ILTMA. se acoja el presente recurso por las causales aludidas. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, de acogerse la causal invocada, Solicito a V.S. ILTMA. que anule la sentencia recurrida y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, donde se declare lo siguiente: a) Que no se imponga a mi**



representada **SONIA FRANCISCA BARRAZA PACHECO**, la agravante de responsabilidad penal del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000; **b)** Que beneficia a mí representada la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, en carácter de muy calificada, de conformidad al artículo 68 bis del mismo texto legal; **c)** Que se condene a mi representada **SONIA FRANCISCA BARRAZA PACHECO**, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, o al quantum de pena que V.S. ILTMA. determine conforme a Derecho, con la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, y la multa sea rebajada a 10 Unidades Tributarias Mensuales o a la extensión que V.S. ILTMA determine, más las accesorias legales; como autora, de un delito de Tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000.”; y, para la subsidiaria: “**1.** Que el Tribunal Ad-Quem acoja el presente recurso por la causal invocada. **2.** Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, proceda el Tribunal de alzada a anular sólo la sentencia; y dicte, sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo en la cual se disponga: **a)** Que afecta a mi representada **SONIA FRANCISCA BARRRAZA PACHECO**, la agravante de responsabilidad penal del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000; **b)** Que beneficia a mí representada la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, en carácter de muy calificada, de conformidad al artículo 68 bis del mismo texto legal; **c)** Que se condene a mi representada **SONIA FRANCISCA BARRAZA PACHECO**, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, o al quantum de pena que V.S. ILTMA. determine conforme a Derecho, con la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, y la multa sea rebajada a 10 Unidades Tributarias Mensuales o a la extensión que V.S. ILTMA determine, más las accesorias legales; como cómplice, de un delito de Tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000.”.

Peticiones y fundamentos, que repiten en estrado, mediante videoconferencia los abogados recurrentes don Eduardo Salomón Lillo



en representación de Cristina Carrasco Piffaut; Pablo Arias Andrade en representación de Jorge Cáceres Vásquez; Rafael Gallardo Durán, en representación de Alexis Barría Villegas; Álvaro Rebhein Paredes en representación de Rodrigo Salazar Vargas; Rogelio Piñeiro Santis en representación de Diego Araneda Guenel y Cristián Cajas Silva en representación de Sonia Barraza Pacheco; en tanto que, por el Ministerio Público, alegó el abogado don Álvaro Pérez D'Alençon, en contra del recurso.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa de la acusada Cristina Johana Carrasco Piffaut:

PRIMERO: Que, el abogado Eduardo Salomón Lillo, en representación de la acusada Cristina Johana Carrasco Piffaut, funda su recurso en la causal establecida en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, por haber omitido la sentencia alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c), esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.

Como fundamentos y luego de reseñar, como hechos, la teoría del caso del Ministerio Público respecto de su representada, expresa que, en la especie, se ha prescindido aplicar los artículos 36 y 297 del Código Procesal Penal, repitiéndose en forma simultánea y sistemática las graves infracciones a dichas normas, como se lee en el considerando Vigésimo Segundo, sobre la conducta imputada a ésta en relación con el tráfico de drogas, que reproduce, en lo pertinente, agregando que el fallo no especifica ni hace una relación y exposición de las probanzas que permiten inferir en forma concreta, directa, precisa y objetiva que a ella le ha correspondido alguna especie de participación en la figura típica del artículo tercero de la Ley N° 20.000.



Añade que, para efectos de imputarle responsabilidad, la sentencia se basa en el hecho de ser la pareja por más de seis años de Jorge Cáceres Vásquez, procediendo en todo momento a inferir o trasvasijar responsabilidades en ella y que eventualmente le podrían corresponder a este último, las que tampoco se encuentran precisadas con los medios probatorios existentes en la carpeta investigativa y acusación que maneja el Ministerio Público, atribuyéndole responsabilidad por el hecho de acudir, el día 23 de febrero de 2021, a la oficina de Servi Estado, en la Ciudad de Coyhaique, para realizar un depósito a Sonia Barraza Pacheco, sin embargo, no se analiza con igual celo, aquellas circunstancias que morigeran o la eximen de responsabilidad en los hechos.

Agrega que, respecto a la omisión a las normas reguladoras de la sana crítica y relativas al análisis objetivo de los hechos se infiere a través de un proceso defectuoso y carente de toda precisión, que su representada, por el hecho de ser encomendada por su pareja a efectuar un depósito, estaría en total conocimiento del objetivo ilícito de aquél, no existiendo prueba alguna ni presunción que se sustente en hechos concretos y conocidos que determine la finalidad antijurídica que sugiera cuál es el fin de tal depósito, la que encontrándose en su casa recibe la llamada de Cáceres Vásquez, se resiste primeramente a efectuar el depósito, y siendo casi la hora de almuerzo, estaría a priori privilegiando realizar las actividades del hogar antes de ir a efectuar la diligencia solicitada por su pareja, no obstante, y debido a la insistencia de éste, asiente, consultándole dónde estaba el dinero y a quién debía depositarlo, es decir con esos argumentos se puede desde ya advertir su poco interés de realizar el cometido, máxime si no sabía dónde se encontraba el dinero, como también la suma y a la cuenta de qué persona debía realizar la operación bancaria.

Refiere que, lo anterior, demuestra que el proceso de inferencia realizado para imputar responsabilidad a su representada a través de



las probanzas existentes en la carpeta investigativa, como aquellas incorporadas en el juicio oral, que la sentencia pretende sustentar para efectos de atribuirle responsabilidad como autora del delito tipificado en el artículo tercero de la Ley N° 20.000, son débiles, poco precisas y ambiguas, es decir, no existe una secuencia o un camino que pueda colegir, más allá de toda duda razonable, que estaba coludida en tal cometido ordenado y encomendado, debilidad que se advierte por el hecho de que en caso alguno se demuestra con hechos concretos, precisos y debidamente probados que ella sabía y conocía la razón de por qué debía efectuar el señalado depósito y, asimismo, nunca se acreditó en el transcurso de la investigación y en el juicio oral, que aquellos dineros provenían de un fin ilícito y que tampoco se acreditó en forma absolutamente objetiva que tales dineros eran para pagar obligaciones derivadas de la compra de drogas o bien pagar en parte envíos anteriores o financiar nuevas adquisiciones.

Señala que, respecto del origen y destino de esos fondos, se tiene que, en circunstancias total y absolutamente parecidas, la sentencia acogió correctamente la exculpación del encartado Sebastián González González, quien encomienda a su madre y a su polola efectuar en igual sucursal de SERVIESTADO, sendos depósitos de más de cuatro millones cada uno, y que además se presentó en juicio al menos una conversación directa entre los encartados Sebastián González y Diego Araneda, que da cuenta que Sebastián González si tiene mayor relación con este acusado y su representada ninguna, sin embargo, la sentencia absuelve de responsabilidad a Sebastián González, ya que no resulta posible inferir que ambos depósitos realizados por personas cercanas a este último hayan tenido un origen y un destino ilícito, y que siendo correcto el razonamiento aplicado al referido encartado, cuál es la razón para no aplicar el mismo criterio en lo que respecta a la operación encomendada por Cáceres Vásquez si no se pudo acreditar en forma fehaciente, precisa



e inequívoca el origen o causa de pagar la suma de cuatro millones de pesos a través del reseñado depósito.

Indica que es de pura lógica, tal como lo exige el artículo 297 del Código Procesal Penal que, en el caso de marras, para extrapolar, o inferir o bien presumir que su representada tenía conocimiento de la causa ilícita y fin último del depósito, que previamente se hubieran acreditado en forma fehaciente el origen de esos recursos y destino que se les pretendía dar, cosa que no está acreditado respecto de la pareja de la encartada y a su vez tales presupuestos se encuentran desechados en la sentencia respecto de similar imputación realizada a Sebastián González González.

Que en similar orden de consideraciones, la sentencia vincula la relación de amistad o de camaradería entre Jorge Cáceres Vásquez y Araneda Guenel para establecer todo el sistema de reproche que se realiza en términos muy alambicados al primero de los nombrados; para ello se utilizan solo las declaraciones que Araneda Guenel prestó ante la Fiscal de la causa en el cuartel de la PDI el día 16 de abril de 2021, sin embargo, no se toman en consideración las declaraciones prestadas por el mismo encartado, en forma libre y espontánea, ante la Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en las que se retracta entre otras importantes revelaciones de todo aquello en que había imputado de responsabilidad a Cáceres Vásquez, desapareciendo con ello todo vestigio de relación que pudiera atribuirse al tipo penal de narcotráfico que se le imputa a su representada, transgrediendo los artículos 36 y 297 del Código Procesal Penal, en circunstancias que merced al principio de inmediación que nutre todo el nuevo sistema procesal penal, la última prueba cumple con mayores estándares de credibilidad y certeza ya que ha sido apreciada directamente por los sentenciadores y no como aquella prestada en el tan lejano 16 de abril del año 2021, debiendo tenerse presente que es el mismo tribunal quien acoge la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000 para el acusado Diego Araneda, sin



considerar la declaración espontánea del juicio oral, en el cual se retracta, acusa a Fiscalía y PDI de guiar su declaración.

Expresa que la sentencia de modo alguno se aboca a referirse mayormente a la gran y severa contradicción que existe entre las declaraciones de Araneda Guenel prestadas ante la Fiscal de la causa y la PDI, en abril del año pasado y sus dichos expresados a la sazón de palabras finales, poco antes de clausurarse las audiencias del juicio de marras, que impiden en términos lógicos su existencia por separado y en conjunto, los sentenciadores debieron haber demostrado cuál de las dos declaraciones se asemejan o se ajustan en mejores términos con la verdad de los hechos, debiendo haberse plasmado en el fallo los razonamientos basados en antecedentes conocidos y demostrables, cuál de estas declaraciones era la que se ajustaba más a los hechos acontecidos, teniendo siempre presente los principios de presunción de inocencia y de duda razonable, sin embargo, no se hace cargo de esta situación y procede a mantener como cierta para los efectos del juicio las deposiciones de Araneda Guenel primitivas.

En lo que respecta a las probanzas relativas a las interceptaciones telefónicas de su representada, que la sentencia hace suyas sin dar mayores razonamientos de por qué razón se cree que lo conversado por aquella es relativo al negocio ilícito de venta de sustancias prohibidas por la ley, y que el Ministerio Público infiere se trataría de acuerdos de venta de droga a terceras personas, ello no admite un mayor razonamiento que aquel que proceda a desecharlas por imprecisas, poco certeras y carentes de toda objetividad, ya que ésta habla con cierta dama que es su amiga, quien le solicita alguna prestación que pudiera realizar, a modo de delivery su pareja, situación que resulta ser absolutamente lícita y no necesariamente debe, sin mayores fundamentos inferirse que lo ofrecido tiene que ser necesariamente algo ilícito y específicamente relacionado con el tráfico de drogas, lo cual tiene su sustento en la circunstancia que



Cáceres Vásquez realizaba durante la etapa que comprende la investigación de marras, labores de servicio de delivery, en favor de los establecimientos del rubro gastronómico como “Patagonia Karken limitada (delivery bulins)”, acreditado con una profusa entrega de permisos de traslado y autorizaciones para el desempeño de entregas de alimentos y bebidas, traslado del personal, compra de insumos para el funcionamiento del establecimiento durante la noche debiendo recordar que en el lapso de tiempo que se investiga todo el territorio nacional se encontraba con toque de queda que comenzaba alrededor de las 21 horas y se extendía hasta las 06 horas de la madrugada.

Que, en ese mismo sentido, pensar que su defendida estaría recibiendo solicitudes de un servicio ilegal de entrega que pudiera realizar su pareja, es absolutamente ilógico ya que los permisos para realizar labores en hora del toque de queda eran en definitiva gestionados por los establecimientos gastronómicos antes indicados y fiscalizados por Carabineros de Chile, resultando casi imposible que una persona, estando potencialmente fiscalizada por una institución policial quien conocía el circuito de calle que se iba a realizar, procediera en forma tan ingenua y puerilmente a traficar droga bajo esas circunstancias y, del mismo modo, las interceptaciones telefónicas infieren sin una base objetiva que aquello ofrecido era una sustancia prohibida por la Ley 20.000., en circunstancias que en caso alguno se habló por parte de Carrasco Piffaut en términos objetivos y concretos que permitieran inferir sin dobles lecturas y de un modo directo que lo ofrecido era alguna sustancia prohibida, y que lo que se puede inferir de éstas es el ofrecimiento de un servicio de entrega, teniendo conocimiento su representada que su marido, quien desde que lo conoce se había desempeñado como chofer, primeramente del Servicio de Salud de Aysén, rondas médicas rurales y luego como taxista independiente, podía realizar tal delivery o entrega, ayudado por los permisos para trabajar durante las horas en que Coyhaique,



como el resto del país se encontraban bajo el toque de queda, motivado por la pandemia del COVID 19.

Manifiesta que, la sentencia no analiza todas las probanzas, no analiza los permisos para laborar de Cáceres Vásquez ni se infieren hipótesis que permitirían determinar que el ofrecimiento de un servicio de delivery realizado por la pareja de su representada no necesariamente debe referirse a entrega de drogas; es decir, los sentenciadores creen que lo indicado por la encartada Carrasco Piffaut es y solo es materia de ofrecimiento ilícito, desechando de este modo, en abierta infracción a la ley, aquellas pruebas que pueden morigerar o eximir de responsabilidad en tales hechos a ésta, prefiriendo con ello solo lo odioso de una prueba débil e infundada, todo lo cual contraviene las normas reguladoras de la sana crítica que exigen a los sentenciadores justificar con las probanzas alegadas e incorporadas válidamente al juicio todos y cada uno de sus razonamientos y consideraciones.

En lo relativo a la imputación que se le hace a su representada, derivada de haber encontrado la PDI, dinero “destinado a fines ilícitos”, en la guantera de su automóvil, como haber encontrado en el mismo vehículo la billetera con documentos, tarjetas bancarias y dinero perteneciente a su pareja, previene que nuevamente tanto el ente persecutor, asistido por agentes de la PDI, dan su propia y sui géneris interpretación de la situación generada, procediendo a inferir de un modo absolutamente débil, su eventual participación en el delito de narcotráfico y que, al acoger la sentencia, las pruebas que la vincularían por el hecho de mantener dinero en el interior (guantera de su automóvil), está aceptando una probanza que no reviste mayores análisis y que era, por decir lo menos, de absoluta arbitrariedad, siendo del todo ilegal e improcedente al no ajustarse a los términos previstos en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Que en efecto, se dice que el hallazgo de dinero en la guantera del automóvil de la encartada, realizado por oficiales de la PDI, a



tempranas horas de la mañana del día 16 de abril de 2021, en su casa, lleva a la conclusión o infiere como resultado que es proveniente de la actividad ilícita de narcotráfico desarrollada por ésta, agregando que el hecho de tener dinero no puede de modo alguno considerarse como una actividad o una circunstancia generadora o que haga presumir inequívocamente que provenga o esté destinado a actividades ilícitas, por lo que, a su juicio, para efectos de poder haber esgrimido esa conjetura necesariamente el Ministerio Público se debió haber basado en hechos objetivos, concretos, los cuales no existen, sino que lo que existe son meras presunciones y sobre esas inferir una nueva lo cual contraviene lo dictaminado por el artículo 297 del Código Procesal Penal, norma que si bien consagra y proclama el principio de libertad de prueba, tanto en lo relativo a la libre elección de las probanzas, tanto del valor que deben darle, primero el ente persecutor y luego, con un mayor estándar, los sentenciadores, exige a su vez una serie de cortapisas, especialmente en lo relativo a regular los procesos de inferencia, es decir como el Tribunal y en forma previa los fiscales, crean y desarrollan dichos procesos, basándose siempre para ello en hechos conocidos y debida y objetivamente acreditados.

Indica que dicha prueba, relativa a una presunción, aparte de ser infundada y transgresora de los parámetros del citado artículo, es absolutamente imprecisa, ya que no repara en analizar hechos y circunstancias que favorecen a su representada, que acreditan que a inicios del pasado año 2021 procedió a efectuar uno o ambos retiros del 10% de las AFP, lo cual le permitió contar con un mayor flujo de circulante, además de la venta del vehículo anterior al Spark, todo lo cual se consigna en el considerando Décimo Séptimo del fallo, relativo a la prueba incorporada por la defensa, específicamente en el punto séptimo referida a contrato de compraventa de vehículo motorizado Great Wall, inscripción HBWR.70-3, entre Cristina Carrasco y Hugo Sotomayor, de fecha 21 de abril de 2021, firma autorizada ante notario, por un valor de venta \$3.000.000, debiendo tenerse presente



que tanto el dominio del automóvil Chevrolet Spark, como el dominio de su casa en la localidad de Ensenada del Valle Simpson, fueron demostrados con pruebas concretas de carácter documentales, al igual que los retiros del 10% de su cuenta de la AFP, venta de vehículo e ingresos de remuneraciones en empresa donde se desempeñó por más de 11 años.

Refiere que, en igual orden de ideas, el hecho de encontrar dentro del automóvil la billetera con documentos, tarjetas bancarias y dinero pertenecientes a su pareja, en nada agrava o permite inferir una situación más proclive a determinar la participación de la encartada en los hechos que se le imputan, ello en atención a que se ha acreditado, y lo ha reconocido incluso la Fiscalía, que ambos son pareja por más de seis años y tienen una hija pequeña en común, lo cual hace absolutamente posible de que en el auto de Cristina Carrasco se encuentren bienes de su pareja y que, finalmente, inferir que dichos hallazgos corresponden a sumas de dinero destinada a ejercer actividades ilícitas relativas al narcotráfico, resulta ser una presunción absolutamente temeraria, sin basamento en ninguna prueba objetiva y que se destruye necesariamente, tanto por su ilegalidad como asimismo, adolece de imprecisión, es decir el proceso de inferencia no demuestra que tales sumas hayan tenido exclusivamente un fin de carácter ilícito, constatándose además que se descartó el comiso del vehículo incautado, pero se mantuvo el correspondiente a los \$500.000, lo que es una contradicción.

En lo relativo a las exiguas cantidades de drogas encontradas en la casa de su representada a la fecha de su detención, refiere que la misma sentencia reconoce y no podría hacerlo de otro modo, que ellas son ínfimas, que no sobrepasan los 7 a 8 gramos, tanto de cannabis como de clorhidrato de cocaína, sin embargo, ello se mantiene en el fallo constituyendo o formando parte, a la sazón de insumo, de los elementos de convicción que utiliza el sentenciador para efectos de fundamentar su decisión final de culpabilidad de la encartada Carrasco



Piffaut, haciendo la salvedad, merced a las declaraciones del encartado Araneda Guenel, prestadas al tiempo de su detención y presentación a la Fiscalía en el cuartel de la PDI de Coyhaique, que la droga incautada en su hogar ubicado en la Ciudad de Puerto Montt iba a ser destinada a la ciudad de Coyhaique, remesada al Sr. Cáceres Vásquez.

Agrega que dicha declaración, de 16 de abril de 2021, (que no se encuentra incorporada en el auto de apertura, no la agrega como prueba, y no es acogida por Fiscalía como atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000) en presencia de la Fiscal del Ministerio Público y de oficiales de la PDI, en que daría a conocer el destino de comercialización de la droga incautada, fueron después abrogadas por la retractación del propio Araneda Guenel, en sus declaraciones y palabras finales ante la Sala del Tribunal Oral de Coyhaique, indicando, en última ratio, que no era efectivo que la droga iba destinada a la Ciudad de Coyhaique y que lo que había expresado lo hizo sin contar con la presencia de un abogado que lo asistiera en su defensa, constatándose, a través del considerando Décimo, relativo a las declaraciones de los acusados, que la declaración prestada en estrados por Araneda Guenel, no es incluida en la sentencia.

Añade que resulta inexplicable entender que el sentenciador en el proceso de marras haya estado por aceptar como verdadera o fiel al devenir de los hechos, la primera declaración prestada por Araneda Guenel tres días después de su detención, y luego de un viaje por tierra desde Puerto Montt a Coyhaique, sin la presencia de un abogado defensor, en circunstancias de que la prueba constituida por las propias declaraciones prestadas ante estrados de la sala que conoció del juicio oral, con las máximas garantías de todo imputado, en presencia de su abogado defensor y donde primó el principio de inmediación que nutre e irradia todo el juicio oral, es completamente contradictoria a la primera, y que si bien los sentenciadores son libres de formarse la convicción con la primera declaración o bien con las



declaraciones ulteriores prestadas en los estrados del juicio oral por el encartado Araneda Guenel, la sentencia se encuentra obligada acorde con lo previsto en los artículos 36 y 297 del Código Procesal Penal a indicar en términos precisos y concretos las razones, motivos o circunstancias que lo llevaron a preferir una de estas dos pruebas, como, asimismo, a indicar en forma expresa las razones, consideraciones y motivos que llevaron a rechazar o restarle valor y eficacia a las declaraciones prestadas por el encartado Araneda Guenel en estrados.

Adiciona que no considera lógico que la sentencia acoja la circunstancia atenuante del artículo 22 de la Ley N° 20.000, respecto del encartado Araneda Guenel, ya que su declaración de 16 de abril 2021, no fue incluida en el auto de apertura del presente juicio oral, ni como prueba ni en el relato o exposición de los hechos, ello en atención a que la Fiscalía no la acreditó como atenuante del citado artículo, por lo que no está incorporada legalmente al juicio oral, solo incluida en forma incorrecta como interrogatorio de la Fiscal en declaración espontánea del juicio, a la sazón de “refrescar la memoria” del declarante, tratando de limar asperezas entre una y otra declaración; pero, aun así la sentencia no la incluye dentro de todas las declaraciones en su considerando Décimo Primero, relativo a las *declaraciones de los acusados*.

Que la inobservancia de las normas citadas se produce en la especie, ya que el Tribunal del Juicio Oral, teniendo a su disposición dos pruebas constitutivas de declaraciones del encartado Araneda Guenel, opta o se inclina por la primera, sin dar razones concretas, desechando de igual forma y sin referirse ni demostrar las razones del rechazo respecto de las declaraciones prestados por éste ante la Sala del Tribunal del Juicio Oral de Coyhaique y, así, la prueba que mantiene con una presunta eficacia el exiguo hallazgo de droga en la casa de Cristina Carrasco, solo se ve afianzada con las declaraciones de las cuales luego se retracta Araneda Guenel, situación que por la



falta de observancia de las normas contenidas en los artículos 36 y 297, ambos del Código Procesal Penal, debe ser descartada completamente, agregando que la sentencia tampoco consideró que las ínfimas cantidades de droga encontradas en la casa de su representada al tiempo de la detención de ella y de su pareja, estaban destinadas únicamente al consumo de Jorge Cáceres Vásquez, quien declaró y reconoció en estrados que ostentaba la condición de consumidor y, tampoco se consideró para descartar la idea de tráfico, las probanzas rendidas por este último tendientes a demostrar su calidad o condición de consumidor, entre otras, un certificado médico, y el informe clínico de laboratorio Thomas de la Ciudad de Coyhaique.

Que respecto a la agravante de responsabilidad penal que se le aplica a su representada, de la letra a) del artículo 19, de la Ley 20.000, refiere que no existe probanza concreta, como tampoco presunción que permita inferir, sobre la base de antecedentes objetivos y debidamente acreditados que ésta formase parte de una determinada agrupación de delincuentes, ya que, fuera de su pareja, Jorge Cáceres Vásquez, sólo conoce a Sebastián González González, por ser amigo desde la niñez del primero, quien además fue absuelto, razón más que suficiente para extraer a dicha persona del listado de presuntos integrantes de la agrupación de delincuentes, por lo que necesariamente se debe indicar que ésta no conoce a los restantes miembros de la presunta agrupación y, asimismo, ellos tampoco conocen a su defendida, como lo constituyen los dichos de Araneda Guenel y, respecto de los demás, no existe constancia entre las demás probanzas acopiadas al juicio oral la existencia de algún grado de conocimiento de estas personas con la encartada y de esta última con aquellos, por lo que corresponde prescindir, a su respecto, de la imputación de la agravante indicada.

Reitera, que no se comprueba que su representada se encontraba trabajando en una organización criminal con un nivel de organización definida, porque no existe evidencia que tenía una



función específica o que realizaba alguna actividad según “jerarquías definidas rígidas” o “no rígidas” y, asimismo, no se puede inferir de la interceptación telefónica que supiera el motivo del reseñado depósito como de la procedencia de los dineros ordenados depositar, ya que la misma ignora todos esos antecedentes y se los hace saber a su pareja, quien le da instrucciones del lugar donde se encuentra, de la cantidad y a quien depositar, pero sin señalarse ninguna suerte de elemento de que pudiera en forma directa, precisa e inequívoca determinar que ella tenía antecedentes sobre la gestión encomendada por su pareja y, de ese modo, los procesos de inferencia que hacen los agentes de la PDI, que ratifica el Ministerio Público y que son acogidos por el fallo, no son más que meras suposiciones o elucubraciones de algo que se quiere o que se fuerza de tal modo la realidad, que no guardan relación con la verdad de los hechos.

DÉCIMO: Que, en relación a la causal de nulidad invocada, artículo 374 letra e), del Código Procesal Penal, cabe consignar que dicha norma establece que el juicio y la sentencia serán siempre anulados cuando en ésta se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 del mismo cuerpo legal, en el caso que se conoce, su letra c), esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del texto señalado.

Que, a su vez, esta última disposición, como es de conocimiento, dispone que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, la máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, debiendo hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso aquella que se desestima, indicando en tal caso las razones para ello. Que, igualmente, la disposición legal indicada requiere que al valorarse la prueba se efectúe el señalamiento de los medios de



prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fundamentación ésta que debe permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia, las reglas de la sana crítica, son normas que deben interpretarse como aquéllas del correcto entendimiento humano en donde deben converger las reglas de la lógica y las de la experiencia y, de tal manera, ellas contribuyen a que el Juez pueda analizar la prueba de acuerdo a la sana razón y al conocimiento experimental de los casos. Pero el juzgador, no tiene la libertad de razonar discrecionalmente, a voluntad, ni arbitrariamente. Por su parte se ha señalado, también, que el conocimiento científico al que el Juez debe sujetar su accionar, es un saber racional, fundado, crítico, objetivo y verificable sobre la realidad, a la vez que racional.

Que, entonces, valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, requiere y obliga a que toda decisión del Juez debe encontrarse racionalmente legitimada y de ahí nace el deber del Tribunal de motivar debidamente su sentencia, expresándose los fundamentos y razones, tanto de hecho como de derecho en que se apoya lo que, a su vez, es una garantía para las partes, para obtener, en definitiva, una sentencia congruente, armónica y razonable y, de no ocurrir ello debe ser reparado jurídicamente a través de los recursos procesales existentes.

DUODÉCIMO: Que, para resolver el recurso de nulidad planteado en estos antecedentes, y por la causal que se hizo valer, cabe indicar que el Tribunal, de acuerdo a los medios de persuasión que consignó en estos autos, dio por establecido, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

“Que a lo menos desde el mes de diciembre de 2020 y hasta el mes de abril de 2021, los acusados ALEXIS BARRÍA VILLEGAS, MARÍA OLMEDO OYARZÚN, DIEGO ARANEDA GUENEL, SONIA



BARRAZA PACHECO, RODRIGO SALAZAR VARGAS, JORGE CÁCERES VÁSQUEZ, y CRISTINA CARRASCO PIFFAUT, procedieron a adquirir, transportar, acopiar, para luego distribuir y comercializar drogas de distinto tipo en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique.

Al efecto se organizaron, con distintas funciones, donde Alexis Barría Villegas era quien efectuaba el contacto con los proveedores para la respectiva adquisición, reunir los dineros para ello, y gestionaba los medios para el traslado de la droga hasta las ciudades de Puerto Montt o Puerto Varas, y una vez recibida procedía a distribuirla.

Diego Araneda Guenel, participaba directamente en las coordinaciones para el traslado de la droga, y al igual que Rodrigo Salazar Vargas en ocasiones efectuaron directamente el transporte de las sustancias ilícitas desde la zona centro del país hasta la región de Los Lagos. Araneda Guenel, a su vez, se coordinaba directamente con Jorge Cáceres Vásquez para la entrega de la droga que éste distribuía y comercializaba en la ciudad de Coyhaique, entre otros aspectos operativos, como el traslado de la droga hacia esa ciudad y la respectiva recepción de dinero por la droga.

Las acusadas María Olmedo Oyarzún, Sonia Barraza Pacheco y Cristina Carrasco Piffaut, parejas de los acusados Barría Villegas, Araneda Guenel y Cáceres Vásquez, respectivamente, en pleno conocimiento de las actividades ilícitas de tráfico de drogas, recibían fondos en sus cuentas bancarias, facilitándolas para la recepción de los dineros destinados a la adquisición de la droga o provenientes de su comercialización, para hacerlos llegar en definitiva a Barría Villegas. Así también doña Cristina Carrasco efectuó a lo menos un depósito en efectivo de dineros con ese origen a la cuenta de Sonia Barraza.

A su vez, todos los acusados mencionados precedentemente participaban en la comercialización de drogas a terceros.



Durante el período señalado, los acusados efectuaron las acciones relacionadas con el tráfico de drogas y recepción de dineros provenientes del tráfico o para su adquisición en forma repetida, quedando claro que los referidos acusados formaban una agrupación o reunión de delincuentes para concretar el tráfico ilícito de estupefacientes, con permanencia en el tiempo, y ejecución de diversas acciones delictivas, y un grado de organización entre sus miembros, pero sin la estructuración jerárquica propia de una asociación ilícita.

Y que con fecha 13 de abril de 2021, en virtud de autorizaciones judiciales de entrada y registro, se logró la incautación de las siguientes sustancias:

A) En el inmueble ubicado en pasaje Ricke 224 de Puerto Varas, a Rodrigo Salazar Vargas, entre sus vestimentas se encontró la cantidad 13,92 gramos netos de sustancia vegetal del género cannabis distribuidos en 7 envoltorios, y en su dormitorio del Hostel en la ciudad de Puerto Varas, se encontró igualmente dicha sustancia en 19 envoltorios de nylon dosificados, y sustancia a granel, con un peso total neto de 297,42 gramos;

B) En el domicilio ubicado en Laguna sin nombre, sector TRAPEN, comuna de Puerto Montt, correspondiente al domicilio de los padres de Alexis Barría Villegas, en el dormitorio que éste ocupaba junto a su pareja María Ignacia Olmedo Oyarzún, éstos mantenían, en una cómoda: cuatro bolsas de nylon transparente, un total de 1 kilo 347 gramos y 72 miligramos de sustancia vegetal verde del género cannabis; dos bolsas de nylon pequeñas contenedoras de cocaína clorhidrato, con un peso total neto de 41,67 gramos; 6 cápsulas bicolor en cuyo interior había



sustancia MDMA, conocida como éxtasis; y un envoltorio metálico de color gris, que contenía 216 estampillas prepicadas con la sustancia 4-BROMO-2,5 también conocida como brolanfetamina o DOB.

C)El mismo día, en el domicilio de calle Rantal 1548 de Puerto Montt, en el cual residían los acusados Diego Araneda Guenel y Sonia Barraza Pacheco, en la dependencia destinada a Quincho, éstos mantenían: una bolsa de nylon contenedora de una sustancia vegetal del género cannabis, con un peso de 151,64 gramos netos; y en el mismo lugar, al interior de una cocina a gas, 27 cápsulas bicolor con MDMA o éxtasis; 35 estampillas prepicadas con la sustancia 4- BROMO-2,5 o brolanfetamina, y una bolsa metálica color gris contenedora de hongos psilocybe con un peso neto de 10,11 gramos.

Sustancias que estaban destinadas a ser entregadas y distribuidas a los integrantes de la agrupación, para su comercialización en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique.

Posteriormente, el día 16 de abril de 2021:

D)En el domicilio de Jorge Cáceres Vásquez y Cristina Carrasco Piffaut, ubicado en sector Ensenada Km 1, Valle Simpson, comuna de Coyhaique, éstos mantenían: una bolsa de plástico reutilizable, en cuyo interior había una sustancia vegetal verde del género cannabis, cuyo peso ascendió a 7,99 gramos netos; una bolsa de nylon transparente con clorhidrato de cocaína con un peso de 5,18 gramos netos; un plato con restos de cocaína con un peso de 0,01 gramos netos, y dos balanzas digitales. Además, se encontró un contenedor plástico en cuyo interior había un



moledor, papelillos y una sustancia vegetal de género cannabis, con un peso de 2,07 gramos netos; y un envase metálico color amarillo contenedor de una sustancia vegetal del género cannabis con un peso de 18 miligramos neto.

E)El mismo día 16 de abril de 2021, se ejecutó una nueva orden de entrada y registro al domicilio ubicado en sector TRAPEN, ya individualizado, y en el dormitorio utilizado por Alexis Barría y María Olmedo, éstos mantenían en un velador un vaso plástico con sustancia vegetal del género cannabis, que tuvo un peso de 59,69 gramos netos.

Todas las sustancias fueron debidamente analizadas por peritos, y se constató que se trata de las sustancias ilícitas indicadas, y en todos los domicilios en que se encontró drogas, también se encontraron balanzas, elemento comúnmente usado por quienes se dedican al tráfico de drogas.”

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto al recurso de nulidad planteado por el abogado don Eduardo Salomón Lillo, al que ya se hizo referencia, fundado en la causal del artículo 342 letra c) en relación con la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal y 297 del mismo cuerpo legal, cabe tener presente, como ya se señaló, que la Defensa la hace consistir en el hecho de no haberse fundamentado en la sentencia las conclusiones que exige la ley, omitiendo un análisis sistemático y global que vincula cada uno de los elementos probados en juicio, infringiendo las normas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba y que el fallo no especifica ni hace una relación y exposición de las probanzas que permiten inferir en forma concreta, directa, precisa y objetiva que a la encartada Carrasco Piffaut le ha correspondido alguna especie de participación en la figura típica del artículo tercero de la Ley 20.000 y luego, dicha defensa, hace una relación de los antecedentes que



existirían en la causa respecto de ésta, particularmente de las declaraciones prestadas en estrados e interceptaciones telefónicas, expresando que el Ministerio Público se debió haber basado en hechos objetivos, los cuales no existen, sino que hay meras presunciones infundadas y que transgreden los parámetros del artículo 297 del Código Procesal Penal, no reparando la sentencia en analizar hechos y circunstancias que favorecen a su representada ni habiéndose efectuado un análisis de la prueba respecto de ello.

DÉCIMO CUARTO: Que, pese a lo señalado por la Defensa, según se puede constatar en la sentencia misma, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal se hicieron plenamente cargo tanto de los hechos como de la participación que en éstos cupo a la encausada, efectuando un análisis circunstanciado y pormenorizado de todos los eventos y circunstancias que se tuvieron por probados, tanto favorables o desfavorables, como también de la valoración de los medios de prueba que fundamentaron sus decisiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin haber contradicho los principios de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Consta, también, del simple examen de la sentencia, que el Tribunal se hizo cargo de toda la prueba producida, incluso de aquella que desestimó, indicándose las razones tenidas en consideración para hacerlo y, del recurso de nulidad planteado, se puede constatar que lo pretendido por la defensa es que se efectúe una nueva valoración de la prueba rendida, lo que se encuentra vedado para este tribunal de alzada.

Es del caso señalar que los hechos y participación de la encausada se dieron por acreditados en forma precisa y clara en el juicio oral llevado a cabo, no constando, tampoco, aparte de una relación imprecisa y difusa que realiza la recurrente, cuáles serían las probanzas que se habrían omitido y de qué manera ello habría acontecido, pretendiéndose descartar la participación de la imputada Carrasco Pifautt con alegaciones genéricas, en orden a que ésta no



tendría vinculación con los hechos investigados, en circunstancias que la sentencia, del análisis de la prueba rendida, llegó precisamente a una convicción contraria y más allá de meras presunciones, intentándose desestimar su participación en hechos circunstanciales como que la suma de dinero encontrado en el automóvil de la incautada corresponderían a actividades lícitas o provenientes del retiro del 10 % de la AFP, como también a que la cantidad de droga encontrada en la casa de la imputada sería exigua, lo que también fue considerado por el Tribunal pero desestimando el valor de ello en atención a otros medios de prueba que fueron allegados y, por ende, sus explicaciones no pueden ser atendidas y, por lo mismo no cabe sino desestimar el recurso de nulidad planteado por la causal invocada.

DÉCIMO QUINTO: Que, la defensa de la encartada Carrasco Piffaut, en su libelo, cuestiona también la agravante de responsabilidad penal que se aplicó a su representada, establecida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, esto es, la de formar parte de una agrupación de delincuentes dedicados al narcotráfico, exponiendo que no existe ninguna probanza concreta que permita inferir, sobre base de antecedentes objetivos y acreditados, que su representada formase parte de ella por lo que correspondería, de pleno derecho, prescindir de dicha agravante, existiendo solo meras suposiciones o elucubraciones respecto a lo mismo.

Sin embargo, aparece evidente que lo discutido al respecto, dice relación con otra causal de nulidad, la que no se ha hecho valer y, en todo caso, la alegación esgrimida carece de sustento material y jurídico dado que efectivamente el Tribunal dejó establecido, en el considerando Vigésimo Séptimo, mediante los medios de prueba legales, la existencia de una agrupación para el tráfico de drogas, señalando quienes la componían, funciones y organización de la misma como actividades que realizaban, lo que permitió dar como concurrente la agravante señalada precedentemente; motivos por los



cuales no cabe sino desestimar la alegación efectuada por la defensa respecto a esta materia.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa del acusado Jorge Alberto Cáceres Vásquez:

DÉCIMO SEXTO: Que, la Defensa, funda su recurso en la causal establecida en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal, por haber omitido la sentencia alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c), esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297, infringiéndose el principio de razón suficiente.

Luego de reproducir el contenido de los hechos acreditados, insertos en el considerando Vigésimo Noveno de la sentencia recurrida, respecto de su representado, además del objeto de la discusión entre las partes, referidas a las alegaciones del Ministerio Público y de la Defensa en sus alegatos de apertura y clausura, refiere que el Tribunal arriba a su decisión de condena en base a lo señalado en el considerando Vigésimo Cuarto, que también reproduce, en lo pertinente, agregando que, en el caso, queda de manifiesto la infracción del principio de Razón Suficiente, toda vez que la sentencia que se recurre, adolece de una serie de defectos, entre ellos, que de los hechos que se tuvieron por acreditados, se establece que el día 16 de abril de 2021, en el domicilio de Jorge Cáceres Vásquez y Cristina Carrasco Pitffaut, ubicado en Sector Ensenada Km 1, Valle Simpson, Comuna de Coyhaique, éstos mantenían una bolsa de plástico reutilizable, en cuyo interior había una sustancia vegetal verde del género Cannabis, cuyo peso ascendió a 7,99 gramos netos; una bolsa de nylon transparente con clorhidrato de cocaína con un peso de 5,18 gramos netos; un plato con restos de cocaína con un peso de 0,1



gramos netos, y dos balanzas digitales. Que, además, se encontró un contenedor plástico en cuyo interior había un molidor, papelillos y una sustancia vegetal de género cannabis, con un peso de 2,07 gramos netos; y un envase metálico color amarillo contenedor de una sustancia vegetal del género cannabis con un peso de 18 miligramos.

Agrega que, además, lo anterior, dice estricta relación con lo declarado por parte de don Jorge Cáceres Vásquez, en orden a que es consumidor tanto de marihuana como de cocaína, a contrario sensu de lo establecido por la sentencia, que en su considerando Vigésimo Cuarto, ya citado, señala: “Existencia del delito de tráfico de drogas imputado a los acusados Barría Villegas, Araneda Guenel, Olmedo Oyarzún, Barraza Pacheco, Salazar Vargas, Cáceres Vásquez, Carrasco Piffaut”, en el que los sentenciadores del grado dejan establecido que Cáceres Vásquez y su pareja Cristina Carrasco Pitffaut, participan en calidad de autores del delito de tráfico de drogas en su grado de consumado, sin perjuicio de aquello en el hecho que se tiene por acreditado con fecha 16 de abril del 2021, esto es, el allanamiento a la casa de ambos, se encuentran 7,99 gramos de Cannabis, 5,18 gramos de clorhidrato de cocaína, 2,07 gramos netos de cannabis, y 19 miligramos de cannabis; pero cabe preguntarse ¿se encontraron elementos de dosificación en el domicilio?, la respuesta es no, y de la misma forma toma solidez la declaración de Cáceres Vásquez al señalar que él tenía pesas en su domicilio para determinar si eran exactas las cantidades que le vendían para consumir, en atención a que se encontró cocaína para consumo sobre una bandeja y un molidor para la preparación de “pitos de marihuana”, además de los informes que se acompañaron que indicaban que éste era consumidor de estas drogas de lo que se desprende la siguiente pregunta, ¿cómo Cáceres Vásquez y su pareja Carrasco Pitffaut trafican sin tener elementos de dosificación?, en los vehículos que se encontraban en la propiedad que compartían en Ensenada Valle Simpson tampoco se encontraron dichos elementos y el Ministerio



Público basó su acusación en escuchas telefónicas, pero sin sustento material, por lo que la pregunta anterior no se satisface.

Añade que, además, la sentencia en ninguno de sus considerandos expone las últimas palabras de don Diego Araneda, quien expone en su declaración final cuando se refiere a “la mala intención policial y fiscal” continuando que “intentaron por todos los medios que dijera que la marihuana del 13 de abril era para Coyhaique, y no era para Coyhaique”, lo que es sumamente relevante al momento de caer en el vicio de nulidad de la razón suficiente, toda vez que, por una parte, el subcomisario Lavado y su equipo investigativo, establecen por la declaración de Diego Araneda, supuestamente oída por ellos, se refiera a este punto y se logra la conexión con Jorge Cáceres, sin perjuicio de aquello Diego Araneda, no lo refiere así, ¿Por qué un punto tan relevante no queda establecido en la sentencia?, y a juicio de esa defensa la falta de dichas palabras en la sentencia dice directa relación con lo establecido en el artículo 432 letra c) del Código Procesal Penal, que expone “contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.”, toda vez que por una parte están las conclusiones del equipo policial y, por otra parte, las del imputado que lo desmiente, preguntándose ¿Por qué no se ponderó adecuadamente dichos testimonios? ¿Por qué no se realizó nexo causal entre la declaración en estrado de Diego Araneda con la supuesta primera declaración prestada? Son preguntas que no se pueden responder, toda vez que la sentencia que se recurre adolece de nulidad.

Manifiesta que, de haberse dictado la sentencia con arreglo a ley, las reglas de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, tendría que haber salido absuelto don Jorge Cáceres



Vásquez, toda vez que está fehacientemente acreditado que es consumidor, sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, a juicio del Tribunal, bastara solamente con las escuchas telefónicas y la prueba material encontrada en el domicilio de este último, se estaría frente a un delito de microtráfico, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N° 20.000, que señala “el que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1° será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.”, agregando que de la prueba aportada al juicio y de los hechos acreditados como el allanamiento al domicilio de Jorge Cáceres Vásquez, se tiene solamente pequeñas cantidades, las cuales estaban destinadas a consumo personal y en caso de que se ponderaran dichas cantidades con las escuchas telefónicas y testimonios policiales se estaría ante un delito de microtráfico.

Indica que no corresponde al sentenciador del grado llenar los espacios que no pudo llenar el Ministerio Público en su teoría del caso, tal como fue en el citado alegato de apertura de la presente causa, que se estableció que el dinero encontrado dentro del vehículo Chevrolet Spark era proveniente del tráfico de drogas y la prueba aportada por el ente persecutor puede responder las siguientes preguntas: ¿Existen sets fotográficos al respecto? ¿Existen testigos que no fueran funcionarios policiales? ¿Tenían los imputados actividades que le generaran ingresos?; la respuesta a esas interrogantes es rotunda, no existen medios de prueba alguno allegados al proceso para determinar que los dineros obtenidos en el



vehículo de la pareja de su representado provengan de tráfico de drogas; de la misma manera no se encontró cantidades exorbitantes de estupefacientes en su domicilio que avalen la teoría del caso del Ministerio Público, menos aún que hayan sido recabados por la investigación policial, y respecto a la última pregunta planteada, efectivamente Jorge Cáceres y su pareja tenían trabajos que le generaban ingresos, tal como consta en peritaje socio familiar que se acompaña, que en las conclusiones señala “El imputado cuenta con trayectoria productiva, como chofer de locomoción colectiva, también cuenta con conocimientos técnicos que le permiten desempeñarse en una actividad laboral formal”.

Señala que, de la misma manera, la sentencia, en ninguna parte establece como un hecho acreditado que su representado es consumidor habitual de marihuana y cocaína y de la misma manera, al quedar en prisión preventiva, incluso sufrió una crisis de abstinencia y, finalmente, el fallo yerra en el principio de razón suficiente, al absolver a Sebastián González y no a su representado, manifestándose que, respecto a González, sólo existen audios, incorporados en la declaración del testigo Lavado Guglielme, como así mismo manifestó que viajaban juntos González y Cáceres, es decir la sentencia no logra explicar, por qué se condena a uno y se absuelve al otro. Que a la cuenta de Sonia Barraza, Sebastián González solicitó que se depositará un monto de \$ 4.501.000 siendo un monto incluso superior al depositado por la pareja de Jorge Cáceres, doña Cristina Carrasco (\$ 4.000.000), y simplemente la sentencia expone “no se incorporó ningún registro de interceptación telefónica en el que Sebastián González aparezca hablando de adquirir drogas o comercializándoselos a terceros”, en cambio se acreditó con los permisos de época de pandemia que Jorge Cáceres Vásquez realizaba servicio de delivery, por lo que cada conversación relacionada a una “entrega” fue asociada por droga, recayendo en el vicio de nulidad de razón suficiente, toda vez que el Tribunal, la prueba



aportada a juicio, la pondera de manera diversa para uno y otro imputado, no quedando más, por parte del Tribunal Superior que enmendar conforme a derecho dicha vulneración del principio de razón suficiente.

En cuanto a la influencia sustancial del vicio objeto de la causal de nulidad en lo dispositivo del fallo y su reparación, señala que, a través de la correcta valoración de los medios de prueba rendidos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, debió absolver a Jorge Cáceres Vásquez del delito de tráfico de drogas previsto y sancionado en el artículo 3 de la ley 20.000; en su defecto, de acuerdo a la prueba material encontrada en su domicilio y sin perjuicio de que se estableciera por su representado que era para su consumo personal, tendría que haberse establecido una condena por microtráfico del artículo 4 de la ley 20.000; y que el vicio de nulidad al vulnerar el principio de razón suficiente da a su representado una condena excesiva, en virtud a la prueba aportada al juicio, al allanamiento realizado a su domicilio y a lo declarado por Diego Araneda en estrados.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación con la causal de nulidad alegada, a que se hizo mención precedentemente, en orden a que se habría infringido el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c), y 297 del Código Procesal Penal, concretamente el principio de Razón Suficiente, la defensa luego de relatar los hechos que se tienen por acreditados y diversas interrogantes que arrojarían respecto a la participación de éste en los hechos que se investigan, como se consignó en el considerando anterior, se concluye que dicho encartado tendría que ser absuelto dado que se acreditó fehacientemente que éste es consumidor de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, que estaban destinadas a consumo personal, es decir, un microtráfico, pero no existiendo medios de prueba alguno, allegados al proceso, para determinar que los dineros obtenidos en el vehículo de la pareja de su representado provinieron del tráfico de



sustancias, a la vez que no se encontró cantidades exorbitantes de estupefacientes en su domicilio por lo que la sentencia erró en el principio de Razón Suficiente, al absolver a otro imputado, Sebastián González y no a Jorge Cáceres, no explicándose porque se condena a uno y se absuelve al otro, discutiendo también un monto de determinada suma de dinero depositada por la pareja de este, doña Cristina Carrasco.

DÉCIMO OCTAVO: Que, lo señalado precedentemente y respecto de la causal invocada, no puede sino ser rechazado dado que es evidente que no resulta efectivo haberse infraccionado el principio de Razón Suficiente en el análisis de los hechos y participación que se dieron por acreditados, no constando que, en la sentencia impugnada, se haya omitido algunos de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal y, muy por el contrario, en esta se realizó un completo análisis de todos los hechos y circunstancias que se dieron por probados, tanto favorables como desfavorables del acusado, efectuándose una valoración de los medios de prueba que fundamentaron sus conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, todo lo cual aparece de la simple lectura del fallo en cuestión, constando que las conclusiones que se emitieron en la sentencia fueron debidamente ponderadas, efectuándose una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieron por comprobados, lo que llevó a desestimar al tribunal la aseveración de que este fuera solamente consumidor concluyendo, también, que los dineros obtenidos provenían del tráfico de droga habiéndose ejecutado estos de un modo directo, entre otros, por Jorge Cáceres, todo lo cual consta en el considerando Trigésimo Primero, lo que consta del análisis de la prueba rendida y los hechos establecidos, por lo que se debe desestimar la causal en cuestión.

En cuanto a lo expuesto por la recurrente en orden a que la sentencia carece de Razón Suficiente, al absolver a Sebastián



González y no a su representado, ello es irrelevante, puesto que la situación y conducta investigada a cada imputado dice relación con la prueba existente respecto de cada uno de los mismos y las conclusiones que el Tribunal determina son independientes para cada caso, de acuerdo a la prueba que se obtenga y, por ende, corresponde rechazar el recurso de nulidad planteado respecto al indicado sentenciado, por la causal que se hiciera valer.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa del acusado Alexis Iván Barría Villegas:

DÉCIMO NOVENO: Que, la Defensa del encausado Alexis Iván Barría Villegas, funda su recurso en la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*, en relación con los artículos, 11 N° 9, 11 N° 6, 18, 57, 67, 68 y 69, del Código Penal y el artículo 19, letra a) de la Ley N° 20.000.

Luego, como antecedentes, refiere que, el Ministerio Público presentó acusación en contra de su representado, como autor de delito de tráfico de drogas, del artículo 3, en relación al artículo 1, de la Ley 20.000, y autor del delito de asociación ilícita del artículo 16 N°1 de la Ley 20.000; ambos en grado consumado, según consta en el considerando Segundo del fallo recurrido, quien finalmente fue condenado como autor del primero de los ilícitos referidos, a la pena 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, en circunstancias que, de haberse aplicado la normativa como en derecho correspondía, la pena impuesta habría sido inferior; y absuelto de los cargos formulados por el segundo; reproduciendo, seguidamente, su motivo Trigésimo Sexto, relativo a la determinación de penas corporales.

Indica que, la causal se fundamenta en que, en el considerando Trigésimo Sexto, el Tribunal yerra en la determinación de pena ya que, en primer lugar, ha existido una errónea aplicación del derecho toda



vez que el aumento en la pena conforme lo mandata el artículo 19 del mismo cuerpo legal, ha sido realizado de manera incorrecta, en términos tales que, de haberse realizado el aumento conforme a derecho, se habría aplicado una pena inferior, es decir, el Tribunal a quo, al momento de determinar la pena, la graduó en un tramo superior al que correspondía.

Agrega que, asimismo, se ha incurrido en un error de derecho por cuanto el Tribunal no reconoció correctamente las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad que concurren respecto de su representado, lo que lo condujo a imponerle una pena mayor a aquélla que correspondería de acuerdo a la ley, por lo cual, de haberse seguido una interpretación ajustada a derecho, se habría llegado a la conclusión que el marco legal aplicable iniciaba en el presidio mayor en su grado mínimo, correspondiendo, consecuentemente, realizar desde aquel mínimo las rebajas de grado que mandata la ley, por concurrir la atenuante especial del artículo 22 de la Ley 20.000 y, por otro lado, de estimarse que la incrementación de la pena efectuada por el Tribunal es la correcta, es preciso destacar que, de haberse aplicado las normas relativas a la determinación de pena contenidas en el Código Penal de manera adecuada, igualmente se habría arribado a una pena inferior.

Como fundamentos, indica que es preciso hacer referencia a la forma en que debe interpretarse el aumento en grado a que hace referencia el artículo 19 de la Ley 20.000, y al respecto, señala que una interpretación acorde con los principios que informan el proceso penal, en especial el principio pro reo, consagrado en el artículo 18 del Código Penal, permite entender que, cuando el referido artículo ordena que la pena sea aumentada en un grado, está necesariamente ampliando el marco penal y, de ese modo, la pena que corresponde aplicar al delito en cuestión, esto es, la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, después de aumentarse en un grado conforme al artículo 19 de la Ley 20.000, queda, en definitiva, en la de



presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado máximo, sentido en el que se encuentra la prevención del Magistrado Zúñiga Valenzuela, que reproduce, en lo pertinente.

Refiere que, así las cosas, la prevención del Magistrado Zúñiga Valenzuela se encuentra plenamente ajustada a derecho y es la forma correcta de interpretar la agravación de grado que debe realizarse según mandato del artículo 19 de la Ley 20.000, por cuanto es respetuosa de los principios que informan el ordenamiento jurídico y, sumado a ello, el Tribunal a quo ha incurrido en un error de derecho toda vez que no reconoció correctamente la circunstancia agravante de responsabilidad que perjudicaba a su representado, así como tampoco las múltiples atenuantes de responsabilidad que le beneficiaban, lo que devino, necesariamente, en que se le imponga una pena superior a la que en derecho correspondía.

Añade que, en la audiencia de determinación de pena, esa Defensa, solicitó que, además de reconocerle la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000, le fuera reconocida la del artículo 11 N°9 del Código Penal, pues ambas son incompatibles, y que mientras la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000, con los riesgos evidentes que ello implica para la seguridad personal de quien pretende configurar tal atenuante, significó un despliegue activo de conductas de su defendido que permitieron al Ministerio Público reunir prueba suficiente que devino en la acusación de varios otros sujetos y, por su parte, la atenuante del artículo 11 N° 9 está configurada por otros hechos que, tal como fuera expuesto ante el Tribunal a quo, su representado entregó voluntariamente todos los teléfonos, renunció a su derecho a guardar silencio durante la investigación como en el juicio oral, y contestó activamente a todas las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

Expresa que, así las cosas, al tener su representado objetivamente la atenuante de responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior, del artículo 11 N° 6, sumada a la del artículo 11 N°



9 y, finalmente, la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000, correspondía que se rebaje la pena en 2 grados con posterioridad al aumento en bloque realizado conforme al artículo 19 de la misma ley y, de ese modo, la pena que se le pudo haber impuesto, si se hubiese realizado una correcta valoración de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, se enmarcaba en el presidio menor en su grado máximo, es decir, iniciaba en los 3 años y 1 día de privación de libertad, y en el peor de los casos a la de 5 años de presidio menor en su grado máximo.

Respecto del perjuicio, señala que la errónea interpretación del derecho en cuanto a los artículos 11 N° 9, 11 N° 6, 18, 57, 67, 68 y 69 del Código Penal y el artículo 19, letra a), de la Ley N° 20.000, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo cual causó a su representado un grave perjuicio, al condenarlo, en definitiva, a una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, en circunstancias que debía ser aplicada una pena inferior.

VIGÉSIMO: Que, la recurrente a que se hizo referencia precedentemente invocó la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal señalando, como fundamento para ello, que el considerando Trigésimo Sexto erró en la determinación de la pena, existiendo una errónea aplicación del derecho, toda vez que el aumento de la sanción conforme lo mandata el artículo 19 de la Ley 20.000 se realizó de manera incorrecta y que de haberse realizado el aumento conforme derecho correspondía aplicar una pena inferior.

Que, asimismo, se incurrió en un error de derecho por cuanto el Tribunal no reconoció correctamente las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad que concurren, imponiéndosele una pena mayor a aquella que correspondía.

Fundamenta su recurso expresando que para ello es preciso determinar la forma en que debe interpretarse el aumento de grado que refiere el artículo 19 de la Ley 20.000, en especial considerándose



el principio pro reo consagrado en el artículo 18 del Código Penal ya que, a su representado, objetivamente le favorece la atenuante de responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior el artículo 11 número 6 y la del número 9 del mismo cuerpo legal, más la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000, por lo que correspondía se rebajara la pena en dos grados con posterioridad al aumento en bloque realizado conforme al artículo 19 de la Ley 20.000 y, de este modo la pena que se pudo haber impuesto, si se hubiere realizado una correcta valoración de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, se enmarca en el presidio menor en su grado máximo, esto es, se iniciaba en los 3 años y un día de privación de libertad y, en el peor de los casos, a la de 5 años de presidio menor en su grado máximo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en relación a lo señalado precedentemente cabe indicar, y así se ha establecido por la jurisprudencia, que los sentenciadores resultan soberanos para determinar la procedencia o no de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes alegadas como concurrentes en el delito durante el desarrollo del juicio, de tal forma que la opinión contraria a esa decisión escapa al control del presente recurso, en tanto no se infraccione la ley en su determinación, lo que no ocurre en la especie por lo que se dirá a continuación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en efecto, en autos se encuentra establecido que los imputados formaron parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la Ley 20.000, señalando en su considerando Vigésimo Octavo, que la prueba no demostró la existencia de una estructura jerárquica definida donde existan personas que ejercen mando y otros en una posición más abajo en la escala jerárquica, que cumplen irrestrictamente las órdenes que imparten los líderes o superiores de la organización, pero sí aparece un nivel de cierta organización donde alguien tiene la labor de reunir los dineros para lograr concretar la adquisición de drogas y generar el abastecimiento, no apreciándose



que los demás integrantes están obligados a cumplir estrictamente lo que éste diga, como tampoco rendir cuentas o entregar las ganancias de la venta de droga.

Que lo anterior llevó al Tribunal a concluir la concurrencia, respecto de Alexis Barría, de la circunstancia del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, es decir, haber formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes la que dispone que, en el caso, la pena deberá aumentarse en un grado, lo que no significa, como lo señala la recurrente, se esté ampliando el marco penal sino que, necesariamente debe procederse, como lo señaló el Tribunal en su considerando Trigésimo Sexto, a aumentarse la sanción en un grado el que se debe efectuar desde el mínimo legal, es decir desde los 5 años y un día quedando el tramo elevado a 10 años y un día y hasta 20 años de privación de libertad y, efectuado el cálculo anterior, en concreto, se deben considerar las atenuantes concurrentes respecto de este acusado de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 68 y 69 del Código Penal, sin que pueda efectuarse algún otro tipo de interpretación que la ley no establece, ya que la expresión “aumentar” es claramente significativa a subir, elevar, incrementar e intensificar, dado que entenderlo de otro modo, no produce los efectos que la ley ha establecido.

Que, sin embargo, en la audiencia de determinación de pena la defensa solicitó al Tribunal, según esta misma lo señala, que, además de reconocer a su representado la atenuante del artículo 22 de la Ley 20.000 y la del artículo 11 N° 6 del Código Penal, se considerara la atenuante del artículo 11 número 9, por lo que correspondía que se rebajara la pena en dos grados y, de este modo, de haberse realizado una correcta evaluación de las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, la pena que se le pudo haber impuesto se enmarca en la de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día y, en el peor de los casos, la de 5 años de presidio menor en su grado máximo.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, respecto de lo anterior, cabe expresar que la determinación relativa a la concurrencia o no de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal constituye una labor privativa del Tribunal el que se ve concretado en el respectivo fallo que se dicta y, por ende, lo pedido por la defensa de este encausado, en cuanto se le imponga una pena menor no puede ser considerada ni tiene influencia sustancial dado que es un hecho que los sentenciadores consideraron dos atenuantes, a que ya se hizo referencia, la del artículo 11 número 6 del Código Penal y artículo 22 de la Ley 20.000, esta última referida a la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, caso en el cual el Tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados, la que resulta incompatible con la establecida en el número 9 del artículo 11 del mismo cuerpo legal, la que el Tribunal no consideró y, así estimó condigno rebajar la sanción solo en un grado, de acuerdo a las atribuciones que la ley le entrega, ya que ello es facultativo y, además, dentro del grado al cual se arribó, es decir presidio mayor en su grado mínimo, estimó razonable regular la sanción en siete años de privación de libertad, teniendo en consideración para ello la mayor extensión del mal producido en cuanto los hechores se dedicaban al tráfico no solo de marihuana sino también de drogas consideradas más duras o dañinas para el organismo, como son la cocaína, la brolanfetamina y el MDMA o éxtasis, también actuando dentro de las prerrogativas que la ley le entrega; motivos por los cuales no puede estimarse, como lo asevera la recurrente, haya existido una errónea aplicación del derecho y, muy por el contrario, el Tribunal procedió a regular la sanción dentro de las facultades que le asiste, lo que descarta una infracción a la normativa legal aplicable al caso, por lo que no cabe sino desestimar el recurso de nulidad planteado a este respecto.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, la recurrente, en subsidio del recurso de nulidad deducido y para el evento que la sentencia del recurso de



nulidad alterara la decisión del tribunal a quo relativa al quantum de la condena de su representado, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en esta causa en cuanto no sustituyó la pena impuesta a su defendido, por las sustitutivas de libertad vigilada de la ley 18.216; alegación ésta que debe ser rechazada puesto que, en primer lugar, y de acuerdo a lo ya expresado, no existió vulneración a la ley que permitiera acoger el recurso deducido, según se expresó, por lo que consecuentemente resulta improcedente e inaplicable lo solicitado en forma subsidiaria pero, además, resulta también improcedente conocer del recurso de apelación considerando de que éste no ha sido concedido el que sólo puede operar una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva condenatoria y únicamente para el evento de que la resolución sobre el recurso de nulidad no altere la decisión del Tribunal a quo respecto de la concesión o denegación de la pena sustitutiva, es decir, en el presente caso resulta inaplicable.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa del acusado Rodrigo Andrés Salazar Vargas:

VIGÉSIMO QUINTO: Que, la Defensa del encausado Rodrigo Andrés Salazar Vargas, funda su recurso en la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*, en relación con el artículo 63, inciso segundo del Código Penal.

El recurrente, fundamentando su recurso, luego de citar y reproducir los hechos de la Acusación Fiscal, insertos en el motivo Segundo de la sentencia recurrida; extractar, además, de los considerandos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto; Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo Tercero, Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto, aspectos relevantes de la sentencia que dicen relación con su representado, expresa, respecto de las normas



erróneamente aplicadas, artículo 63 del Código Penal, que señala: “No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse.”, y que es a raíz de esta norma que es improcedente, en este caso concreto, la aplicación de la agravante especial del artículo 19 letra a) de la ley 20.000, que establece que “Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: A) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16.”

Refiere, en relación con lo anterior, que es fundamental contextualizar que su representado fue condenado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, respecto de lo cual no existe cuestionamientos por esa Defensa, toda vez que en dos ocasiones éste trasladó las sustancias desde la ciudad de Linares a la ciudad de Puerto Varas, circunstancia que fue acreditada y admitida por el mismo en su declaración, pero, el cuestionamiento de la Defensa, se encuentra en la aplicación de la agravante especial de la letra a) del artículo 19 de la Ley 20.000, ello porque como ha sido demostrado en el juicio, la participación de su defendido en los mismos se concreta con fecha 30 de marzo, fecha en la cual se realiza el primero de los dos viajes en los que participó, en una causa cuya audiencia de control de detención se efectúa con fecha 18 de abril de 2021, es decir, el apareció en las últimas 2 semanas de investigación.

Añade que, con anterioridad a esa fecha, su representado y el imputado Alexis Barría, quien es sindicado como el líder de la organización, mantenían una relación de cliente-proveedor, desde el



año 2020, año desde el cual don Rodrigo Salazar comienza a comprarle aproximadamente cada dos semanas 50 gramos de marihuana, los cuales iban destinados en gran parte al consumo personal de las sustancias en razón de presentar adicción a las mismas, y la otra parte de dichas sustancias era destinada a la venta “al menudeo”, como refiere la sentencia, toda vez que de las intercepciones telefónicas existentes se acredita que él vendía marihuana en cantidades de 1 o 2 gramos, no más que eso, lo que es concordante con las declaraciones de ambos imputados y, así las cosas, producto de su adicción, comienza a consumir marihuana de tal forma que la que vendía no alcanzaba para pagar lo que compraba al imputado Alexis Barría, generándose una deuda entre ambos.

Agrega, que durante el mes de marzo de 2021, Alexis Barría, solicita a su representado participar en un viaje coordinado y organizado completamente por el imputado Alexis Barría, con rumbo hacia la ciudad de Linares junto a otros sujetos, dentro de los cuales se encuentra el coimputado Diego Araneda, con el objeto de que en conjunto compren una mayor cantidad de marihuana a un precio más económico, solicitud a la cual su defendido accede, en atención principalmente a su adicción y a la deuda que mantenía con Alexis Barría, viaje que se concreta con fecha 30 de marzo de 2021, y su representado compró 125 gramos de marihuana, aproximadamente, aportando con un total de \$500.000, y que el trato consistió en que cada uno pondría una cuota y con posterioridad dividirían la marihuana adquirida en proporción a su aporte, droga que en aquella ocasión fue de aproximadamente 2 kilos, y que el segundo viaje, de fecha 12 de abril de 2021, presentó características similares, y en aquella oportunidad su representado adquirió aproximadamente 250 gramos de marihuana, lo que es concordante con lo incautado al momento de su detención.

Indica que, lo relevante de lo anteriormente señalado es que la participación de su representado en el delito de tráfico ilícito de



estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, que se le imputa, se ve limitada a los dos viajes relatados y, además, se ve estrechamente ligada al contacto que toma con él, el imputado Alexis Barría con el objeto de que efectúe esos viajes a la ciudad de Linares, viajes cuya coordinación y planificación era completamente efectuada por el líder de la agrupación, de tal forma que sin haber existido esa reunión, su defendido no podría haber incurrido en el delito de tráfico que se le imputa, que se ve ligado de tal forma a la coordinación elaborada por el imputado Alexis Barría, que el aplicar la circunstancia agravante especial del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, claramente implica contrariar lo prescrito en el artículo 63, inciso 2° del Código Penal, ya que, el hecho de haber participado en el viaje planificado por el Imputado Alexis Barría Villegas, junto a otros sujetos (situación que en la sentencia se tornó en la agravante especial ya aludida) es de tal manera inherente al delito en que incurrió su representado, que de no haber ocurrido de esa forma, no habría podido cometerse por su parte el delito en sí mismo, esto es tan así, que éste ni siquiera contaba con el contacto de la persona de Linares que les suministraría las drogas, así como tampoco conocía a las personas con las que viajaría a dicha ciudad.

Señala que, siendo dicha participación en grupo o reunión de sujetos, inherente al delito en el caso concreto de su representado, no puede esa misma circunstancia también ser aplicada como agravante, ya que en definitiva se atenta de esa forma de manera significativa a lo establecido en el artículo 63 inciso 2° del Código Penal, norma que es una manifestación del principio non bis in ídem, el cual implica que nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por un mismo hecho; y que de haberse aplicado correctamente el derecho, cumpliendo con lo dispuesto por dicha norma, entiende que no podría haberse aplicado la agravante especial del artículo 19 letra a) de la ley 20.000, razón por la cual la pena aplicada habría sido de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, en vez de la de 10 años y 1 día de



presidio mayor en su grado medio que se aplicó en definitiva producto de esa circunstancia agravante, ello tomando también en consideración que la participación de su representado comienza con fecha 30 de marzo de 2021 y es detenido con fecha 13 de abril del mismo año, razón por la cual, se puede estimar que la mayor o menor extensión del mal causado conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código Penal, se encontraría en su rango mínimo.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en relación con el recurso de nulidad consignado precedentemente, interpuesto por el abogado Álvaro Rehben Paredes, en representación de Rodrigo Salazar Vargas, dicho profesional, luego de señalar los hechos de la acusación, las declaraciones de los diversos imputados y participación que eventualmente habrían correspondido a estos como las actividades realizadas, aspectos relevantes en relación del imputado Rodrigo Salazar sobre recaudación de dinero de venta de drogas y adquisición de nuevas remesas de sustancias, existencia de una agrupación para el tráfico de drogas y el ciclo de este, como también la participación que le habría cabido a Rodrigo Salazar; calificación jurídica establecida respecto del delito de tráfico ilícito de drogas; alegaciones de la defensa; circunstancias modificatorias de responsabilidad y la determinación de penas corporales, interpuso el recurso de nulidad basado en la causal establecida en el artículo 373 del Código Procesal Penal, letra b), esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, estimando como erróneamente aplicado el artículo 63 del Código Penal que señala que no producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo, agregando que tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse.



Que, de acuerdo a lo señalado en la norma citada aparece como improcedente que, en este caso concreto, se haya aplicado la agravante especial del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, la anterior alegación no puede ser considerada puesto que el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, sobre el tráfico de drogas, en forma expresa dispone que tratándose de un delito de tráfico de drogas, la pena deberá ser aumentada en un grado si concurre como circunstancia que el imputado haya formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16. Por ende esta disposición, que es de carácter especial ya que se encuentra inserta en una ley que expresamente sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, es plenamente aplicable al caso de autos y no se divisa infracción al artículo 63 del Código Penal, la que tiene un carácter y naturaleza jurídica distintos, por lo que no se divisa, de modo alguno, que se vulnere el principio non bis in ídem que implica que nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por un mismo hecho. Es así que la regla señalada en el artículo 19 letra a) expresamente se coloca en el caso de delitos castigados en la ley 20.000 y, de darse las circunstancias que se señalan en esta, específicamente en su letra a), determina con certeza y sin interpretación distinta, que la sanción necesaria y perentoriamente debe ser aumentada en un grado, encontrándose el imputado Salazar Vargas en tal situación, lo que descarta la alegación de la defensa en cuanto existiría una misma circunstancia que haya sido aplicada como agravante ya que ello simplemente no aconteció, y encontrándose también establecido que respecto a este encartado, no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, atenuantes ni agravantes, llevó a la conclusión que se le impusiera una sanción de 10 años y un día, por lo que el derecho fue aplicado correctamente sin existir vulneración de la norma jurídica que se dice infringida y, por ende, no cabe sino desestimar el recurso deducido y, así se declarará.



En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa del acusado Diego Javier Araneda Guenel:

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en lo que respecta del imputado Diego Javier Araneda Guenel, su defensa, a través del Defensor Penal Público, don Rogelio Andrés Piñeiro Santis, fundamentando su recurso, en forma principal, en la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, luego de reproducir, respecto de su representado, los hechos establecidos y acreditados por la sentencia, especialmente el considerando Vigésimo Noveno; la calificación jurídica; circunstancias modificatorias de responsabilidad penal; y, participación en los mismos como agrupación para el tráfico de drogas, así como el ciclo de éste, señalados en el motivo Vigésimo Séptimo, estima que la norma erróneamente aplicada, y que considera en consecuencia infringida, es la del artículo 19 letra a), de la Ley 20.000, que reproduce, en lo pertinente.

Señala, al respecto, que el artículo 16 de la Ley 20.000 es excluyente, al señalar que sólo en el supuesto que no se constituya el delito de asociación ilícita, tendrá cabida la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, por lo que es incongruente imputar ambas conjuntamente, por lo que el Ministerio Público no puede desconocer dicha alternatividad y solicitar la imputación de ambas en base a unos únicos hechos y medios de prueba, estimando que, lo que pudo hacer el Ministerio Público, era imputar el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, en subsidio del delito de asociación ilícita.

Sostiene que, lo que se discute por la defensa es la imposibilidad de imputar de forma conjunta equivocándose los sentenciadores al considerar que lo señalado en el artículo 16 de la Ley 20.000 sólo opera como una limitación para el tribunal, en cuanto a que de forma alguna podrían condenar por el delito y la agravante a la vez, ya que dicha interpretación permitiría la vulneración de derechos del imputado al no exigir claridad y precisión a la acusación, según lo establecido en el artículo 259 del Código Procesal Penal, señalando que el tribunal



incurre en un error de derecho al convalidar el error insubsanable del Ministerio Público en la imputación de su acusación.

Estima que se incurre en otro error de derecho al desconocer el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, desde que, el delito de tráfico ilícito de drogas por el que se condenó a su representado, por su propia naturaleza de actividad económica, aunque ilícita, requiere en determinados casos, necesariamente, la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta para poder cometerse. Así, a juicio del defensor, para el caso en concreto y atendido a que las circunstancias climáticas impiden la producción, el actuar conjunto de los imputados constituye una circunstancia inherente al delito, ya que debe haber una adquisición de la misma en un lugar geográfico diferente y también debe transportarse al lugar donde se distribuirá.

Asimismo, sostiene que, en este caso en donde el transporte de la droga desde la zona centro de nuestro país se volvía una necesidad, así como también el acopio y el transporte de la misma hasta la región de Los Lagos y la región de Aysén, el actuar de más de una persona era necesario para que se pudiera cometer, en los términos que consideró el tribunal el delito del tráfico ilícito de drogas.

Esgrime que, dicho ilícito lo clasifica como un delito continuado, pues varias de sus acciones pueden darse al mismo tiempo, pero todas ellas serían parte integrante del mismo delito y no de varios ilícitos de tráfico, en tanto la pluralidad de acciones realizadas por un mismo sujeto se encuentran ideológicamente conectadas, por lo que de no entenderse el delito de tráfico ilícito de drogas de la manera señalada, se estarían considerando dos veces las mismas acciones, afectando el principio non bis in ídem.

Así entonces, considera que, este actuar de múltiples personas, debe tener un cierto nivel de organización para su funcionamiento.

Agrega que la permanencia y organización serían requisitos y, respecto del último, debe identificarse el plus de disvalor que funda



una distinción plausible entre la simple ejecución conjunta y la organización como requisito de la agravante ya que, la existencia de una mínima organización, es inherente a cualquier planificación o ejecución delictiva conjunta y, por tanto, debe haber una exigencia distintiva entre ambas.

Por último, citando, el referido artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, y, a la Real Academia Española, alega que, el disvalor de la conducta de tráfico se encuentra sancionado en la propia figura penal del artículo 3 de la Ley 20.000, que se trata de un delito complejo, de emprendimiento, que contempla una multiplicidad de hipótesis, y por tanto, no corresponde aumentar el disvalor de la responsabilidad penal, imponiendo una agravante en base a la misma conducta que configura la figura penal.

En consecuencia, estima que, la pena probable para su representado sería la de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, el pago de una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales y, a las accesorias legales que correspondan, o la pena que el tribunal determine conforme a derecho.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, la causal de nulidad invocada por el recurrente, consiste en aquella contenida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, la que establece que es procedente la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

TRIGÉSIMO: Que, de lo expuesto por el recurrente en su presentación, se infiere que lo impugnado por la causal invocada en forma principal, artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, dice relación con lo dispuesto en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, norma que alega como infraccionada, en primer lugar, en relación al artículo 16 de la misma ley, artículo que establece que sólo en el



supuesto que no se constituya el delito de asociación ilícita, tendrá cabida la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo incongruente que el Ministerio Público impute ambas, esto es, el delito de asociación ilícita y a su vez, la agravante referida de forma conjunta, como ocurrió, debiendo haberlas deducido una en subsidio de la otra, errando los sentenciadores al considerar que lo señalado en el artículo 16 de la Ley 20.000 sólo opera como una limitación para el tribunal, en cuanto a que de forma alguna podría condenar por el delito y la agravante a la vez, lo que permitiría la vulneración a los requisitos establecidos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, errando así el tribunal al convalidar el error insubsanable del Ministerio Público.

Que, en segundo lugar, y bajo la misma causal, estima infraccionado el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, referente a que las circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no puedan cometerse, no producen el efecto de aumentar la pena.

Así, la defensa considera que el delito de tráfico ilícito de drogas por el que se condenó a su representado, por su propia naturaleza (condiciones climáticas, adquisición en un lugar geográfico distinto, transporte, y distribución) requiere necesariamente la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta, debiendo tener además, un cierto nivel de organización para su funcionamiento, por lo que estima, no puede ser aplicada la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, el cual señala que, *“...a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”*.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en lo referente a que el tribunal yerra al convalidar el error en que habría incurrido el Ministerio Público, al acusar por el delito de asociación ilícita y conjuntamente, invoque la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, es preciso indicar que, dicho artículo establece que: “Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser



aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16.”

En el mismo orden de cosas, el artículo 16 de la misma ley, al referirse al delito de asociación ilícita indica que: “Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen (...)”

Por tanto, al tratarse de los delitos descritos en la referida ley 20.000, la pena deberá ser aumentada en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, siempre y cuando su actuar no satisfaga el delito de organización, esto es, de asociación ilícita del artículo 16, caso en el cual, no le es permitido al tribunal aumentar en un grado la pena, desde el momento que ésta ya es constitutivo de un ilícito.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el recurrente fue condenado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, establecido en el 3 de la Ley 20.000, el cual señala que: “Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.”

En este sentido, al ser condenado por el delito descrito, no existe impedimento alguno para el tribunal de considerar la circunstancia agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, desde



que ésta circunstancia es procedente, siempre y cuando, no se trate del delito de asociación ilícita del artículo 16 de la misma ley, por lo que no se advierte de qué modo el tribunal pudo haber convalidado el “error” imputado al Ministerio Público, y consecuentemente, haber aplicado erróneamente el derecho, más aún si se tiene presente que es el tribunal el que determina la existencia de un delito, independiente ello a lo pedido por el Ministerio Público, y no puede fundarse un recurso de nulidad haciendo valer para ello que debió solicitarse subsidiariamente, puesto que dicha circunstancia carece de relevancia jurídica.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, estos sentenciadores comparten lo razonado por los jueces del grado, en el considerando Vigésimo Séptimo de la sentencia que se conoce, en orden a que se trata de instituciones a todas luces diferentes, pues, mientras que el artículo 16 de la Ley 20.000 tipifica una conducta, antijurídica, culpable y punible, esto es, un ilícito determinado, el artículo 19 letra a), del mismo cuerpo legal, versa sobre circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, específicamente, sobre una agravante, accesoria a un tipo penal determinado, y, en conclusión, no es atendible la alegación de la defensa en torno a que debió el Ministerio Público, alegar dicha circunstancia, en subsidio.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en lo referido por la recurrente en orden a que la naturaleza del delito que se conoce ya contiene los elementos que son considerados en la circunstancia agravante, esto es, formar parte de una agrupación o reunión de delincuentes, por lo que no cabe su aplicación, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código Penal, pues caso contrario, se vulneraría el principio non bis in idem, cabe indicar que, la sentencia impugnada, en su considerando Vigésimo Séptimo, razona sobre las circunstancias de participación de cada uno de los involucrados en el delito, en atención a la prueba producida en el proceso, y da cuenta de la existencia de una organización o agrupación de hecho entre los



acusados Barría Villegas, Araneda Guenel, Salazar Vargas, Olmedo Oyarzún, Barraza Pacheco, Cáceres Vásquez y Carrasco Piffaut, que actuaba de forma prolongada en el tiempo, de manera coordinada y con funciones determinadas, entre las que destacan, encargarse de contactar directamente con los proveedores para adquirir las sustancias, reuniendo y recaudando dineros destinado a dicha adquisición, gestiones para obtener el pago de las drogas entregadas a terceros, otro de ellos participando del transporte de los encargos, tomar notas de cuentas relacionadas, facilitación de cuentas bancarias por parte de algunos de los involucrados, adquisición de drogas, coordinada y gestionada por Alexis Barría y Araneda Guenel, ya que este último se comunicaba con él para darle cuenta de posibles nuevas adquisiciones invitándolo a entrar en la jugada, según las expresiones utilizada en los audios interceptados, le pide que le transfiera dineros para concretar aquello, sin perjuicio del pago de sustancias ya entregadas; los dineros respectivos eran depositados o transferidos en la cuenta de Sonia Barraza, sin perjuicio de otros depósitos directos a Alexis Barría, o en caso de viajar a la X Región, pagaba en efectivo a Diego Araneda, y la droga que recibía Cáceres Vásquez éste la recibía, distribuía y comercializaba en Coyhaique, señalando, finalmente el fallo recurrido que, todos los acusados mencionados efectuaban comercialización de drogas de modo directo.

En consecuencia, el Tribunal señala que quedó en evidencia que los acusados mencionados conforman una agrupación o reunión de delincuentes, en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo el objetivo común la adquisición y comercialización de drogas, concretando así el ciclo del tráfico de drogas, incluso advirtiéndose entre ellos que tengan cuidado con los teléfonos o que todos los Huawei están malos, demostrando permanencia en el tiempo para la consecución de un fin común y, en consecuencia, no se divisa una infracción al principio non bis in ídem que se alega.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, en efecto, es preciso indicar que el



artículo 63 del Código Penal, agrega que, “No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse.”

Que, en ese orden de cosas, del precepto señalado se infiere que las circunstancias agravantes inherentes al delito sin cuya concurrencia no puedan cometerse, no producen el efecto de aumentar la pena.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, de lo señalado, y conforme la calificación jurídica que se dio a los hechos, corresponde al delito de tráfico ilícito, no pudiendo otorgársele el carácter de inherente al delito, las razones invocadas por la defensa, en orden a que se requirió, necesariamente, la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta debido a que por razones climáticas la adquisición de la droga debía realizarse en un lugar geográfico distinto a la región de Aysén, y que en virtud de lo mismo, debía concurrir alguien encargado del transporte y por último, alguien encargado de la distribución, pues sigue tratándose del mismo delito, pese a su especial modalidad de comisión, la cual es precisamente, la que hace procedente la aplicación de la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.

Que, en atención, precisamente, a que el delito de que se trata es tráfico ilícito de drogas, en el cual participaron activa y coordinadamente los acusados, formando parte de una agrupación o reunión de delincuentes, es que es del todo procedente la aplicación de la circunstancia agravante referida, por lo que dicha causal debe ser desestimada, y así se declarará.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en subsidio de la causal anteriormente invocada, fundamenta su recurso, igualmente, en la



causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, y luego de reproducir el considerando Trigésimo Sexto de la sentencia impugnada, concerniente a la determinación de penas corporales, señala que la norma erróneamente aplicada, que considera en consecuencia infringida, es el artículo 68 y 11 N° 6 del Código Penal; así como los artículos 1, 3, 19 letra a) y 22 de la Ley 20.000.

Manifiesta que, su representado, fue condenado como autor del delito de Tráfico ilícito de drogas, en grado de ejecución consumado, a sufrir la sanción de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una multa ascendente a 40 Unidades Tributarias Mensuales y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Sostiene que, respecto de esta pena base corresponde aplicar las circunstancias modificatorias de la pena y, en el caso, perjudica a su representado la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, agravante que aumenta en un grado la penalidad, por lo que no sitúa en el presidio mayor desde el grado medio al grado máximo.

Así entonces, estima que corresponde aplicar las atenuantes que benefician a su representado y, la primera, y de mayor relevancia para la defensa, es la del artículo 22 de la Ley 20.000, reconocida por el tribunal aun cuando no había sido aceptada por el Ministerio Público en su acusación, y que la declaración de su representado no sólo tuvo especial relevancia en este juicio, sino que además originó una segunda investigación que involucra a la madrastra de uno de los imputados en la causa, quien es Jueza de la República, y en la cual, actualmente, el recurrente es testigo.

Señala que corresponde aplicar la segunda atenuante que beneficia a su representado, esta es, la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, es decir, la irreprochable conducta anterior.



Al respecto, agrega que resulta inconsistente el planteamiento del tribunal frente a casos de co-imputados que tenían menores elementos favorables pero, sin embargo, se le impusieron penas más favorables que a su representado.

Por tanto, a juicio de la defensa, corresponde que a la pena base de presidio mayor en sus grados mínimo a medio del delito de tráfico, debe aplicarse la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, aumentando en un grado la penalidad, situándose en el presidio mayor desde el grado medio al grado máximo. Posteriormente, corresponde aplicar la atenuante del artículo 22 de la misma Ley 20.000, rebajando la penalidad en dos grados para finalmente aplicar la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, por lo que la pena no se ajusta a derecho, toda vez que le favorecen dos atenuantes de responsabilidad y sólo una agravante, siendo más ajustada a derecho la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, en lo que respecta a la causal alegada de forma subsidiaria, de lo expuesto por el recurrente se desprende que lo reprochado por la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, dice relación con lo dispuesto en los artículos 68 y 11 N° 6 del Código Penal; y, los artículos 1, 3, 19 letra a) y 22 de la Ley 20.000, normas jurídicas que se estiman infraccionadas, desde que respecto de la pena base corresponde aplicar la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, aumentando en un grado la penalidad, situándose en el presidio mayor desde el grado medio al grado máximo. Posteriormente, según la defensa, corresponde aplicar la atenuante del artículo 22, rebajando la penalidad en dos grados para finalmente aplicar la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, siendo más ajustada a derecho la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, en lo relativo a la participación del



acusado Diego Javier Araneda Guenel, debe tenerse presente que, el tribunal razonando sobre la calificación jurídica de los hechos establecidos, grado de desarrollo y participación de los acusados, en el considerando Vigésimo Noveno de la sentencia que se recurre, dictaminó que los hechos configuran el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000, el cual se encuentra en grado de consumado, ya que se ejecutaron todos los elementos del tipo penal, de modo directo por los acusados, incluido el recurrente de autos, de modo conjunto, ejecutando las funciones que a cada uno correspondía, formando parte de una agrupación o reunión de delincuentes en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo por tanto su participación como autor ejecutor directo en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

CUADRAGÉSIMO: Que, tal como fue razonado ampliamente, por el tribunal a quo en su considerando Trigésimo Quinto, al acusado Araneda Guenel, le es aplicable la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, reconocida en la propia acusación y se desprende también de su respectivo extracto de filiación.

Así también, se ha estimado concurrente la atenuante de cooperación eficaz del artículo 22 de la Ley 20.000, pues si bien el acusador no le reconoció ésta en la acusación, el tribunal sí la ha estimado concurrente, desde que según los antecedentes presentados en juicio fue el primer acusado en prestar declaración, el mismo día que llegó a la ciudad de Coyhaique, aportando antecedentes propios sino también la de otros partícipes.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, señalado lo anterior, el tribunal, en su considerando Trigésimo Sexto, efectúa un análisis detallado de la determinación de las penas corporales que se aplicará efectivamente, en el caso del acusado Diego Araneda Guenel, concurriendo en su favor, tal como se dijo, la atenuante especial de cooperación eficaz del artículo 22 de la Ley 20.000, la que permite al



tribunal rebajar la pena hasta en dos grados. No obstante, el tribunal razonando en torno a la actividad que tuvo Diego Araneda en el transporte de la droga y las coordinaciones con el acusado Cáceres Vásquez, para concretar la entrega de droga a éste, estimó condigna la rebaja sólo en un grado, quedando en presidio mayor en su grado mínimo, y dado que concurre a su respecto también la atenuante de irreprochable conducta anterior, estimó razonable el tribunal una pena de siete años de privación de libertad, atendida la mayor extensión del mal producido en cuanto se dedicaban al tráfico, no sólo de marihuana, sino también de drogas consideradas más duras o dañinas para el organismo como son el clorhidrato de cocaína, la brolanfetamina y el MDMA o éxtasis.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, es necesario también precisar que el recurso de nulidad, es de derecho estricto, excepcional y circunscrito únicamente a las causales que establece la ley; así, en el presente caso, el reproche a la sentencia dictada dice relación con la determinación de la pena realizada por los jueces del grado, debiendo considerarse que ello es aplicación discrecional, casuística y de exclusiva competencia de los mismos, la que se realiza en base a los hechos por ellos determinados previamente, y que para la regulación de la pena exacta, el tribunal debe tener en consideración, en primer lugar, el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, así como la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

Así entonces, dicha circunstancia, por sí misma ya es suficiente para desestimar el recurso de nulidad intentado pero, sin perjuicio de lo anterior, debe agregarse que la regla establecida para la determinación de la pena del artículo 68 del Código Penal, y las variaciones que contienen según las circunstancias del caso, es una regla de carácter general y que los sentenciadores del fondo deben considerar apreciando todos los antecedentes allegados a la causa, pero en caso alguno se trata de una norma que obligue a aplicar la



pena dentro de una extensión determinada y, por ende, de conformidad a lo razonado precedentemente, no se advierte por estos sentenciadores que el fallo impugnado hubiere contravenido el texto formal del artículo 68, del Código Penal, en relación con los artículos 11 N°6 del Código Penal; artículo 1, 3, 19 letra a) y 22 de la Ley 20.000 y, consecuentemente, tampoco se advierte una errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; por lo que el recurso de nulidad deducido por la causal indicada debe ser rechazado.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la Defensa de la acusada Sonia Francisca Barraza Pacheco:

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en lo que respecta a la imputada Sonia Francisca Barraza Pacheco, su defensa, a través del Defensor Penal Público, don Ricardo Flores Tapia, fundamenta su recurso, en lo principal, en la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal y luego de reproducir, respecto de su representada; los hechos establecidos y acreditados por la sentencia, especialmente, en el considerando Vigésimo Noveno; la calificación jurídica, participación en los mismos como agrupación para el tráfico de drogas y el ciclo de éste, señalados en el motivo Vigésimo Séptimo, estima que la norma erróneamente aplicada, que considera infringida, es la del artículo 19 letra a), de la Ley 20.000, que reproduce, en lo pertinente.

Indica, al respecto, que el artículo 16 de la Ley 20.000 es excluyente, al señalar que sólo en el supuesto que no se constituya el delito de asociación ilícita, tendrá cabida la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, por lo que es incongruente imputar ambas conjuntamente, por lo que el Ministerio Público no puede desconocer dicha alternatividad y solicitar la imputación de ambas en base a unos únicos hechos y medios de prueba, estimando que, lo que si podía hacer el ministerio Público, era imputar el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, en subsidio del delito de asociación ilícita.



Alega que, lo que se discute por la defensa, es la imposibilidad de imputar de forma conjunta equivocándose los sentenciadores al considerar que lo señalado en el artículo 16 de la Ley 20.000 sólo opera como una limitación para el tribunal, en cuanto a que de forma alguna podrían condenar por el delito y la agravante a la vez, ya que dicha interpretación permitiría la vulneración de derechos del imputado al no exigir claridad y precisión a la acusación, según lo establecido en el artículo 259 del Código Procesal Penal, señalando que el tribunal incurre en un error de derecho al convalidar el error insubsanable del Ministerio Público en la imputación de su acusación y, por tanto, vulnera el principio de congruencia que se exige a las sentencias en el artículo 341 del Código Procesal Penal.

Asimismo, estima que se incurre en otro error de derecho al desconocer el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, desde que, el delito de tráfico ilícito de drogas por el que se condenó a su representada, por su propia naturaleza de actividad económica, aunque ilícita, requiere en determinados casos, necesariamente, la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta para poder cometerse. Así, a juicio del defensor, para el caso en concreto y atendido a que las circunstancias climáticas impiden la producción, el actuar conjunto de los imputados constituye una circunstancia inherente al delito, ya que debe haber una adquisición de la misma en un lugar geográfico diferente y también debe transportarse al lugar donde se distribuirá.

Del mismo modo, sostiene que, en este caso, en donde el transporte de la droga desde la zona centro de nuestro país se volvía una necesidad, así como también el acopio y el transporte de la misma hasta la región de Los Lagos y la región de Aysén, el actuar de más de una persona era necesario para que se pudiera cometer, en los términos que consideró el tribunal el delito del tráfico ilícito de drogas.

Señala que, dicho ilícito lo clasifica como un delito continuado, pues varias de sus acciones pueden darse al mismo tiempo, pero



todas ellas serían parte integrante del mismo delito y no de varios ilícitos de tráfico, en tanto la pluralidad de acciones realizadas por un mismo sujeto se encuentra ideológicamente conectada, por lo que de no entenderse el delito de tráfico ilícito de drogas de la manera señalada, se estarían considerando dos veces las mismas acciones.

Considera que, este actuar de múltiples personas, debe tener un cierto nivel de organización para su funcionamiento.

Al respecto, estima que la permanencia y organización serían requisitos y, respecto de la última, debe identificarse el plus de disvalor que funda una distinción plausible entre la simple ejecución conjunta y la organización como requisito de la agravante ya que, la existencia de una mínima organización, es inherente a cualquier planificación o ejecución delictiva conjunta y, por tanto, debe haber una exigencia distintiva entre ambas y citando, el referido artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, y a la Real Academia Española, cuestiona que exista tal distinción plausible que sitúe el caso en la organización como requisito de la agravante.

Sostiene que, existe un consenso mayoritario, tanto en doctrina como en la jurisprudencia, en que no es requisito de la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000 que todos quienes hayan participado en la agrupación o asociación deban ser perjudicados por la misma. Así, la conciencia, conocimiento y voluntades de pertenencia a esta organización destinada a cometer delitos de tráfico de drogas es requisito para dar por establecida dicha agravante y la participación accesoria y circunstancial se contrapone a dicho requisito.

Manifiesta que esta situación es la que afecta a la imputada Sonia Barraza, quien tuvo como principal participación la facilitación de su cuenta corriente para que don Diego Araneda, recepcionara dineros provenientes del tráfico de drogas, conducta accesoria y evidentemente circunstancial que no permite suponer su voluntad o conciencia de agruparse para delinquir, agregando que, la referida



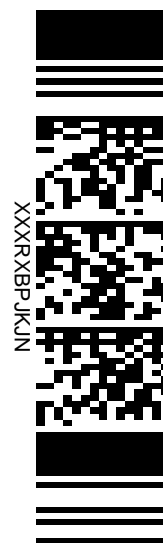
imputada se desempeñaba prósperamente como psicóloga, profesión que era su fuente de ingresos segura y estable, obedeciendo su participación únicamente a una falta de diligencia producto del estrés del ejercicio de su profesión y de ser madre de dos niñas de 1 y 3 años, además de un lamentable exceso de confianza en quien era su pareja, citando al respecto lo sostenido la Excm. Corte Suprema en la causa Rol 2406-2012, reproduciendo su considerando Noveno.

Por último, alega que el disvalor de la conducta de tráfico de estupefacientes se encuentra sancionado severamente en la propia figura penal del artículo 3 de la Ley 20.000, que se trata de un delito complejo, de emprendimiento, que contempla una multiplicidad de hipótesis, tiene pena de crimen y, por tanto, no corresponde aumentar más aún, el disvalor de la responsabilidad penal, imponiendo una agravante en base a la misma conducta que configura el tipo penal.

En consecuencia, estima que, la pena probable para su representada sería de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, al pago de una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales y a las accesorias legales que correspondan o la pena que el tribunal determine conforme a derecho.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, respecto de la causal de nulidad invocada por el recurrente, debe tenerse presente que el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, dispone que procede la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, del recurso de nulidad planteado se desprende, entonces, que lo impugnado por la causal invocada en forma principal, artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, dice relación con lo dispuesto en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, norma jurídica que se estima infringida, en primer lugar, en



relación al artículo 16 de la misma ley, el que manifiesta que sólo en el supuesto que no se constituya el delito de asociación ilícita, tendrá cabida la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo incongruente que el Ministerio Público impute ambas, esto es, el delito de asociación ilícita y a su vez, la agravante referida de forma conjunta, como ocurrió, debiendo haberlas deducido una en subsidio de la otra, errando los sentenciadores al considerar que lo señalado en el artículo 16 de la Ley 20.000 sólo opera como una limitación para el tribunal, en cuanto a que de forma alguna podrían condenar por el delito y la agravante a la vez, lo que permitiría la vulneración a los requisitos establecidos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, errando así el tribunal al convalidar el error insubsanable del Ministerio Público.

Que, en segundo lugar, estima infraccionado el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, referente a que las circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no puedan cometerse, no producen el efecto de aumentar la pena.

Al respecto la defensa estima que el delito de tráfico ilícito de drogas por el que se le condenó a su representada, por su propia naturaleza (condiciones climáticas, adquisición en un lugar geográfico distinto, transporte, y distribución) requiere necesariamente la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta, debiendo tener además, un cierto nivel de organización para su funcionamiento, por lo que considera, no puede ser aplicada la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, el cual señala que, *“...a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”*, agregando, que no es requisito de la agravante señalada, que todos quienes hayan participado en la agrupación o asociación deban ser perjudicados por la misma, siendo necesaria la conciencia, conocimiento y voluntad de pertenencia a esta organización para dar



por establecida dicha agravante, lo que a juicio de la defensa, ocurre con Sonia Barraza, pues, únicamente se debió a una falta de diligencia, y de un exceso de confianza de quien en ese entonces, era su pareja, Diego Araneda Guenel.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en relación con lo alegado por la defensa, referido a que el tribunal yerra al convalidar el error en que habría incurrido el Ministerio Público, al acusar por el delito de asociación ilícita y conjuntamente, invocó la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, es preciso indicar que, dicho artículo establece que: “Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16.”

A su vez, el artículo 16 de la misma ley, al referirse al delito de asociación ilícita indica que: “Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen (...)”

En consecuencia, de lo señalado precedentemente, es dable concluir que, al tratarse de los delitos descritos en la referida ley 20.000, la pena deberá ser aumentada en un grado si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, siempre y cuando su actuar no satisfaga el delito de organización, esto es, de asociación ilícita del artículo 16, caso en el cual, no le es permitido al tribunal aumentar en un grado la pena.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en ese orden de cosas, consta que la recurrente fue condenada como autora por el delito de tráfico ilícito de drogas, establecido en el 3 de la Ley 20.000, el cual señala que: “Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a



que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.”

Así, entonces, al ser condenada por el delito referido, no existe impedimento para el tribunal de considerar la circunstancia agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, desde que ésta circunstancia es procedente, siempre y cuando, no se trate del delito de asociación ilícita del artículo 16 de la misma ley, por lo que no se advierte de qué modo el tribunal pudo haber convalidado el “error” imputado al Ministerio Público, y consecuentemente, haber aplicado erróneamente el derecho.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte adhiere a lo reflexionado por los Jueces del grado, en el considerando Vigésimo Séptimo de la sentencia impugnada, en orden a que se trata de instituciones a todas luces diferentes, pues, mientras el artículo 16 de la Ley 20.000 tipifica una conducta, antijurídica, culpable y punible, el artículo 19 letra a), del mismo cuerpo legal, versa sobre circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, específicamente, sobre una agravante, accesoria a un tipo penal determinado, en el caso, sobre el delito de tráfico de drogas y, en conclusión, no es atendible la alegación de la defensa en torno a que debió el Ministerio Público, alegar dicha circunstancia, en subsidio.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, en lo referido a la alegación de la defensa, consistente en que la naturaleza del delito que se conoce ya contiene los elementos que son considerados en la circunstancia agravante, esto es, formar parte de una agrupación o reunión de delincuentes, por lo que no cabe su aplicación, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código Penal, pues



caso contrario, se vulneraría el principio non bis in idem, cabe destacar que, la sentencia impugnada, en su considerando Vigésimo Séptimo, razona sobre las circunstancias de participación de cada uno de los involucrados en el delito, en atención a la prueba producida en el proceso, y da cuenta de la existencia de una organización o agrupación de hecho entre los acusados Barría Villegas, Araneda Guenel, Salazar Vargas, Olmedo Oyarzun, Barraza Pacheco, Cáceres Vásquez y Carrasco Piffaut, que actuaba de forma prolongada en el tiempo, de manera coordinada y con funciones determinadas, entre las que destacan, encargarse de contactar directamente con los proveedores para adquirir las sustancias, reuniendo y recaudando dineros destinados a dicha adquisición, gestiones para obtener el pago de las drogas entregadas a terceros, otro de ellos participando del transporte de los encargos, tomar notas de cuentas relacionadas, facilitación de cuentas bancarias, labor en la cual principalmente se desenvolvía Sonia Barraza, estando en pleno conocimiento del tráfico de drogas, participando de la recepción de los dineros provenientes de ventas de drogas o destinados a su adquisición, principalmente, de depósitos hechos por Cáceres Vásquez y Carrasco Piffaut, para posteriormente transferir los dineros a cuentas bancarias de María Olmedo Oyarzún, o retirando por caja de inmediato y eran entregados a Alexis Barría, señalando, además, el fallo recurrido, que todos los acusados mencionados efectuaban comercialización de drogas de modo directo.

En consecuencia, el Tribunal señala que quedó en evidencia que los acusados mencionados conformaron una agrupación o reunión de delincuentes, en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo el objetivo común la adquisición y comercialización de drogas, concretando así el ciclo del tráfico de drogas, incluso advirtiéndose entre ellos que tengan cuidado con los teléfonos o que todos los Huawei están malos, demostrando permanencia en el tiempo para la consecución de un fin común, hechos todos estos que quedaron



plenamente asentados en la sentencia dictada, a la vez que también quedó determinado que la encausada Barraza actuó en calidad de autora directa, por lo que no procede considerarse, ahora, que ésta solo fue cómplice en el delito que se trata, como lo pretende su defensa.

QUINCUAGÉSIMO: Que, en cuanto se habría infringido el artículo 63 del Código Penal, es necesario indicar que dicha disposición establece que: “No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse.”

Que, en consecuencia, del precepto señalado se infiere que las circunstancias agravantes inherentes al delito sin cuya concurrencia no puedan cometerse, no producen el efecto de aumentar la pena.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, de lo consignado precedentemente, y conforme la calificación jurídica de los hechos, se debe tener en consideración que ésta corresponde al delito de tráfico ilícito de drogas, no pudiendo otorgársele el carácter de inherente al delito, las razones invocadas por la defensa, en orden a que se requirió, necesariamente, la intervención de una multiplicidad de personas actuando en forma conjunta debido a que por razones climáticas la adquisición de la droga debía realizarse en un lugar geográfico distinto a la región de Aysén, y que en virtud de lo mismo, debía concurrir alguien encargado del transporte y, por último, alguien encargado de la distribución, pues sigue tratándose del mismo delito, pese a su especial modalidad de comisión, la cual es precisamente, la que hace procedente la aplicación de la agravante contenida en el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000.

Que, en atención, precisamente, a que el delito de que se trata



es tráfico ilícito de drogas, en el cual participaron activa y coordinadamente los acusados, formando parte de una agrupación o reunión de delincuentes, es que es del todo procedente la aplicación de la circunstancia agravante referida, por lo que la causal de nulidad invocada debe ser desestimada.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en subsidio de la causal anteriormente invocada, fundamenta su recurso, también, en la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, luego de reproducir, el considerando Vigésimo Cuarto, concerniente a la existencia del delito de tráfico de drogas imputado a su representada, señalando que la norma erróneamente aplicada, que considera en consecuencia infringida, es el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Señala que, la imputada es de profesión psicóloga y sus únicas fuentes de trabajo e ingresos se relacionan con la misma, indicando que su fructífera carrera tiene como fundamento las aptitudes técnicas, especializaciones y postgrados de la misma y, además, su importante currículum laboral.

Manifiesta que, la imputada efectivamente tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Diego Araneda (actualmente ex pareja), además, le proporcionaba su cuenta corriente para que éste recepcione dineros relacionados con el tráfico y, también, en un caso específico asiste a Diego Araneda recibiendo un pedido de droga de un tercero, además, contestando llamadas para el mismo, proveniente de otros condenados en la causa. Sin embargo, todas estas conductas dicen relación con hechos ajenos, específicamente hechos de Diego Araneda y la recurrente limita su participación a una mera colaboración de estos hechos ajenos, alegando, además, que Sonia Barraza Pacheco, de ninguna manera tenía ni podía tener el dominio del hecho, puesto que sus actividades accesorias se limitaban a lo señalado anteriormente y no la facultaba para tomar decisiones respecto a las actividades delictivas.

Agrega que cabe calificar la conducta de su representada como



de complicidad en el ilícito investigado, ello por cuanto la teoría del dominio de hecho, es lo que debe marcar los límites entre la autoría y complicidad, puesto que, por más trascendencia legal y social que tenga la ley 20.000, esta no cambia las reglas generales de participación del Código Penal, por lo que debe ser calificado como cómplice aquel que sin tener el poder de disposición sobre las sustancias traficadas o de decisión sobre actos ejecutados, cooperan a la ejecución de los hechos punibles, por actos anteriores o simultáneos.

Refiere que, según doctrina que cita, los tipos penales contenidos en la ley 20.000 han de interpretarse conforme a la teoría del dominio del hecho, de acuerdo con la cual, por una parte, sólo podrán ser considerados autores quienes tienen la posibilidad de dejar seguir o interrumpir la ejecución de la acción típica, y por otra, deberán ser considerados cómplices, quienes ejecuten actos de simple ayuda, secundarios o auxiliares, fácilmente reemplazables y subordinados a la actuación del verdadero autor, por cuanto no importan participación ni en la decisión delictiva, ni en el dominio del hecho, citando, además, jurisprudencia pertinente.

Por tanto, estima la defensa que, la pena probable para Sonia Francisca Barraza Pacheco sería la de 3 años y un día, el pago de una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales y, a las accesorias legales.

QUINCUGÉSIMO TERCERO: Que, en lo concerniente a la causal alegada de forma subsidiaria, del recurso se desprende que lo impugnado por la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, dice relación con lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, norma jurídica que se estima infraccionada, desde que las conductas que se le imputan a su representada dicen relación con hechos ajenos, específicamente de Diego Araneda, limitando su participación a una mera colaboración de estos hechos ajenos, pues ésta no tenía poder ni dominio del hecho, sin la facultad para tomar



decisiones respecto a las actividades delictivas, calificando su conducta como de complicidad en el ilícito, pues coopera a la ejecución de los hechos punibles, por actos anteriores o simultáneos.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, en lo relativo a la participación de la acusada Sonia Barraza, cabe tener presente que el tribunal, razonando sobre la calificación jurídica de los hechos establecidos, grado de desarrollo y participación de los acusados, en el considerando Vigésimo Noveno de la sentencia que se recurre, señala que, los hechos configuran el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley 20.000, el cual se encuentra en grado de consumado, ya que se ejecutaron todos los elementos del tipo penal, de modo directo por los acusados, incluida la recurrente de autos, de modo conjunto, ejecutando las funciones que a cada uno correspondía, formando parte de una agrupación o reunión de delincuentes en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, siendo por tanto su participación como autor ejecutor directo en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, tal como fue razonado ampliamente, por el tribunal a quo en su considerando Trigésimo Primero, esta Corte estima que no es atendible la alegación de la defensa de la referida, en torno a que la cuenta bancaria de ésta habría sido utilizada mediante engaños de su entonces pareja Diego Araneda, toda vez que, mediante la prueba de autos, especialmente, de los registros de audios a los que se logró tener acceso por parte del tribunal, se observa que Sonia Barraza Pacheco, tuvo conocimiento absoluto de la actividad ilícita, desde que un tercero le pide llevarle 3 gramos de marihuana y ella accede; tenía conocimiento que en su domicilio, que es de su propiedad, se mantenía guardada droga, incluso el testigo Mauro González dio cuenta de un audio relacionado con haberse quemado unas estampillas de LSD, recibiendo ella la droga que Alexis Barría fue a dejar el día 13 de abril de 2021, la que luego fue incautada, sin que haya demostrado que desconocía o no



vio el contenido del paquete entregado, lo que no resultó creíble para el tribunal, siendo preciso, además, tener en consideración, las comunicaciones efectuadas cuando Diego Araneda viaja el 30 de marzo a buscar droga a la zona central.

Que, en ese orden de ideas, cabe a esta Corte coincidir y hacer suyo los argumentos dados por el tribunal para desestimar la alegación de Barraza Pacheco, habiéndose acreditado entonces, que ésta no actuó engañada o sin haber consentido en el actuar ilícito en que se involucró, formando parte efectiva, de la agrupación en los términos del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, configurándose, por tanto, una participación de autora directa, como ya se dijo, y no de complicidad en los hechos materia de investigación y corresponde entonces, desestimar la causal de nulidad invocada, al no evidenciarse que el tribunal del grado, haya hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373, 374, 376 y 384 del Código Procesal Penal, se declara:

I.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Eduardo Salomón Lillo, abogado, Defensor Particular, en representación de la sentenciada Cristina Johana Carrasco Piffaut, por la causal del artículo 374, letra e), en relación con los artículos 342, letra c), y 297, todos del Código Procesal Penal, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, en cuanto por ella, en lo recurrido, con fecha catorce de Julio de mil veintidós, se condenó a la indicada Carrasco Piffaut, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito



de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

II.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Pablo Arias Andrade, Defensor Privado, en representación del sentenciado Jorge Alberto Cáceres Vásquez, por la causal del artículo 374, letra e), en relación con los artículos 342, letra c), y 297, todos del Código Procesal Penal, en contra de la sentencia ya indicada, por medio de la cual y en lo recurrido, al indicado Cáceres Vásquez, se le condenó a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

III.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Rafael Gallardo Durán, Defensor Privado, en representación de Alexis Iván Barría Villegas, por la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 11 N° 9 y 6 y 18, 57, 67, 68 y 69, del Código Penal, y artículo 19, letra a) de la Ley N° 20.000, en contra de la ya citada sentencia, por medio de la cual y, en lo recurrido, se condenó al referido Barría Villegas, a la



pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

IV.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Rodrigo Rehbein Paredes, Defensor Particular, en representación del sentenciado Rodrigo Andrés Salazar Vargas, por la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 63 del Código Penal, en contra de la referida sentencia, por medio de la cual y, en lo recurrido, se condenó al citado Salazar Vargas, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

V.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Rogelio Andrés Piñeiro Santis, Defensor Penal



Público, en representación del sentenciado Diego Javier Araneda Guenel, por la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 19, letra a), de la Ley 20.000, como principal y, en subsidio, misma causal, en relación con los artículos 68 y 11 N° 6 del Código Penal y artículos 1, 3, 19 letra a) y 22 de la Ley 20.000, en contra de la sentencia indicada, por medio de la cual y, en lo recurrido, se condenó al referido Araneda Guenel, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, y accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

VI.- Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Ricardo Flores Tapia, abogado, Defensor Penal Público, por la sentenciada Sonia Francisca Barraza Pacheco, por la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 19, letra a), de la Ley 20.000, como principal y, en subsidio, misma causal, en relación con el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en contra de la indicada sentencia, por medio de la cual y, en lo recurrido, se condenó a la citada Barraza Pacheco, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico



ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19 letra a) de la misma ley, cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021, respectivamente, en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique; sin concederle pena sustitutiva y con los abonos que en la misma se le reconocen, sin costas y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, **NO SON NULOS**.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse, oportunamente.

Redacción del señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos, quien no firma por haber cesado en el cargo.

Rol N° 157-2022 y Acumuladas (Penal).



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

En Coyhaique, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

